



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



TESIS

**Alcances de la responsabilidad civil de las partes procesales ante el
incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial**

Autor:

Bach. Montenegro Molocho Marco Manuel

Asesor:


Mag. Leopoldo Yzquierdo Hernández

Para optar el título profesional de Abogado

Fecha de sustentación: 22 de noviembre del 2022

Lambayeque, 2022

Tesis denominada: “Alcances de la responsabilidad civil de las partes procesales ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial” presentada para optar el TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO, por:



Bach. Montenegro Molocho Marco Manuel
Autor



Mag. Yzquierdo Hernández Leopoldo
Asesor

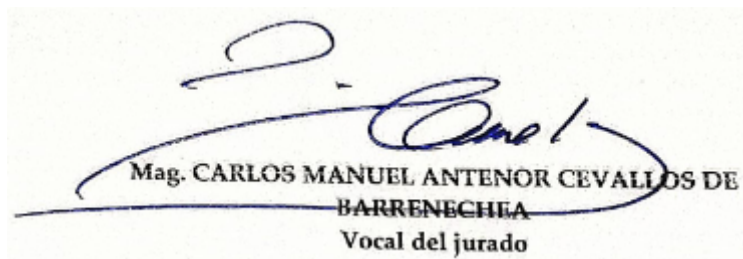
APROBADO POR:



Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO
Presidente del Jurado



Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
Secretario del Jurado



**Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE
BARRENECHEA**
Vocal del jurado

Dedicatoria

A Don Camilo Renán Montenegro Dávila, mi padre.

Agradecimiento

A mi madre y a mi hermano, por su amor y apoyo incondicional, en todo momento.

Indice

| | |
|--|-----|
| Dedicatoria | iii |
| Agradecimiento | iv |
| Indice | v |
| Índice de tablas | ix |
| Índice de ilustraciones | x |
| Resumen | xi |
| Abstract | xii |
| Introducción | 13 |
| Capítulo I..... | 17 |
| Aspectos Metodológicos | 17 |
| 1.1. Realidad problemática | 18 |
| 1.1.1. Planteamiento del problema | 18 |
| 1.1.2. Formulación del problema..... | 20 |
| 1.2. Justificación e importancia de la investigación | 20 |
| 1.2.1. Justificación | 20 |
| 1.2.2. Importancia | 21 |
| 1.3. Objetivos | 22 |
| 1.3.1. Objetivo general..... | 22 |
| 1.3.2. Objetivos específicos | 22 |
| 1.4. Hipótesis | 22 |

| | |
|---|----|
| 1.5. Variables | 22 |
| 1.5.1. Variable independiente | 23 |
| 1.5.2. Variable dependiente | 23 |
| 1.6. Tipo de investigación | 23 |
| 1.7. Métodos | 25 |
| 1.7.1. Método exegético jurídico | 25 |
| 1.7.2. Método sistemático | 26 |
| Capítulo II | 27 |
| Marco teórico | 27 |
| 2.1. Las facultades de las partes procesales, los litisconsortes y la propuesta del órgano de auxilio judicial | 27 |
| 2.1.1. Antecedentes de la investigación | 27 |
| 2.1.2. Las partes en el proceso civil | 29 |
| 2.1.3. Función de los litisconsortes | 33 |
| 2.1.4. El desempeño de los órganos de auxilio judicial | 38 |
| 2.2. La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil frente al incumplimiento de obligaciones | 41 |
| 2.2.1. Definición de responsabilidad civil..... | 41 |
| 2.2.2. El incumplimiento de las obligaciones..... | 45 |
| 2.2.3. La responsabilidad civil de las partes en el proceso..... | 49 |
| Capítulo III | 51 |
| Análisis y resultados..... | 51 |

| | |
|--|----|
| 3.1. De los resultados de la evaluación de resoluciones..... | 51 |
| 3.2. De los resultados sobre la validación de los expertos | 69 |
| Capítulo IV | 81 |
| La contrastación de la hipótesis | 81 |
| 4.1. La discusión de los resultados obtenidos en la investigación | 81 |
| 4.1.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Desarrollar doctrinariamente las facultades de las partes procesales, entre ellas los litisconsortes, con especial atención respecto a la propuesta del órgano de auxilio judicial que se ha designado” | 81 |
| 4.1.2. Discusión sobre el objetivo específico: Estudiar la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil orientada hacia el incumplimiento de las obligaciones, como argumento..... | 85 |
| 4.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: Analizar la necesidad de incorporar una regla de responsabilidad civil sobre las partes procesales, que propone un órgano de auxilio judicial que incumple con sus obligaciones y por ende con la finalidad del proceso. | 87 |
| 4.2. La validación de las variables | 90 |
| 4.2.1. Validación de la variable independiente: “La responsabilidad civil ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial, propuesto por las partes del proceso” | 90 |
| 4.2.2. Validación de la variable dependiente: “La facultad de las partes procesales para proponer el órgano de auxilio judicial en la administración del negocio” | 91 |

| | |
|---|-----|
| 4.3. La contrastación de la hipótesis | 93 |
| Conclusiones: | 94 |
| Recomendaciones | 96 |
| Anexos..... | 97 |
| Anexo N° 1. FORMULARIO DE ENCUESTA | 97 |
| Bibliografía..... | 100 |

Índice de tablas

Tabla 1: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 1”. 69

Tabla 2: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 2”. 71

Tabla 3: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 3”. 73

Tabla 4: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 4”. 75

Tabla 5: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 5”. 77

Tabla 6: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 6”. 79

Índice de ilustraciones

| | |
|---|----|
| Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 1”. | 70 |
| Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 2”. | 72 |
| Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 3”. | 74 |
| Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 4”. | 76 |
| Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 5”. | 78 |
| Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 6”. | 80 |

Resumen

“Alcances de la responsabilidad civil de las partes procesales ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial”

En el desarrollo de la actividad jurisdiccional que corresponde a la resolución de conflictos en los cuales se incluyen bienes e intereses comunes, requiere de la atención de las pretensiones solicitadas con la participación de los sujetos procesales, a ese nivel se asume que las decisiones que ha de tomar el juzgador deben orientarse en función a las reglas de las partes procesales. Para ciertos casos especiales al requerirse la designación de un órgano de auxilio judicial, se otorga la potestad para que una de las partes del proceso, ya sea demandante, demandado o litisconsortes, asuman la facultad de proponerlo con el objetivo de coadyuvar a cumplir con lo ordenado por el juzgador.

Sin embargo, en la práctica se ha podido observar que dichos órganos de auxilio judicial no cumplen a cabalidad con sus obligaciones, las mismas que se presume soluciona el conflicto. esta circunstancia se repite de forma constante propiciando no sólo un desajuste de la estabilidad económica o patrimonial del negocio o del bien administrado, sino que atenta con el principio de autoridad del órgano jurisdiccional; por lo mismo que, se advierte la posibilidad de atribuir responsabilidad civil a las partes procesales, que hubieran propuesto la designación del órgano de auxilio judicial que recae en incumplimiento, debido a que ha propuesto un órgano de auxilio judicial incompetente que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones esenciales.

Palabras claves: Responsabilidad civil, Partes procesales, Incumplimiento, obligaciones, órgano de auxilio judicial

Abstract

“Alcances de la responsabilidad civil de las partes procesales ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial”

In the development of the jurisdictional activity that corresponds to the resolution of conflicts in which common goods and interests are included, it requires the attention of the requested claims with the participation of the procedural subjects, at that level it is assumed that the decisions that have to take the judge should be oriented according to the rules of the procedural parties. For certain special cases, when the designation of a judicial aid body is required, the power is granted so that one of the parties to the process, be it plaintiff, defendant, or joint litigators, assumes the power to propose it with the objective of helping to comply with the ordered by the judge.

However, in practice it has been observed that said judicial aid bodies do not fully comply with their obligations, which are presumed to resolve the conflict. This circumstance is constantly repeated, not only causing an imbalance in the economic or patrimonial stability of the business or of the good administered, but also in violation of the principle of authority of the court; For the same reason, the possibility of attributing civil liability to the procedural parties, who had proposed the appointment of the judicial aid body that falls into non-compliance, is noted, because it has proposed an incompetent judicial aid body that has not been able to fulfill their essential obligations.

Keywords: Civil liability, Procedural parts, Non-compliance, obligations, judicial aid organ

Introducción

“Alcances de la responsabilidad civil de las partes procesales ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial”

La realidad jurisdiccional se desarrolla bajo diversidad de características y condiciones, advirtiéndose circunstancias en las que impera de cierta forma la voluntad de una o varias personas que como partes del proceso influyen en el resultado del mismo o minimizan la posibilidad de la ejecución de las decisiones que se adoptan en una decisión final o sentencia.

Partiendo de ello es que se ha considerado apropiado el estudio de la particular característica que adoptan los procesos de ejecución en cuanto se trate de la administración de una empresa con el fin de liquidarla, donde existen diversidad de intereses de por medio; en ese sentido se ha planteado una interrogante puntual que muestra el problema de la investigación: ¿Qué argumento jurídico sustentaría que la facultad de las partes del proceso al proponer el órgano de auxilio judicial en la administración del negocio le pueda generar responsabilidad civil, ante el incumplimiento de las obligaciones que tienen?

Del mismo modo y siguiendo la estructura metodológica para el desarrollo de la investigación, en base a la previa percepción de la realidad sobre el tema abordado, se planteó una conjetura inicial con el fin de responder a dicha pregunta: De existir una norma jurídica, de carácter procesal, que regule la responsabilidad civil que tendrán los integrantes del proceso [partes del proceso], por haber propuesto a un órgano de auxilio judicial que ha incumplido con sus obligaciones esenciales, se evitaría que se busque proponer a un órgano de auxilio judicial con intereses particulares y con ello dilatar el cumplimiento del objetivo para el cual fue propuesto y designado.

Sobre tal construcción es importante dejar en claro que los elementos que componen esta conjetura, se reconocen como los ejes de la investigación, ejes sobre los que se desarrolla todo el contenido, así pues se tiene en primer lugar que su unión permitió crear la meta principal de esta tesis: Determinar el argumento jurídico para sustentar que la facultad que tienen las partes procesales para proponer al órgano de auxilio judicial que coadyuve a resolver el conflicto, le pueda generar responsabilidad civil, ante el incumplimiento de sus obligaciones.

Del mismo modo, la participación de las variables ha permitido configurar las tareas secundarias que se tuvo por desarrollo, así es como al lado del objetivo general, se incorpora el apoyo de los objetivos específicos: el primero, desarrollar doctrinariamente las facultades de las partes procesales, entre ellas los litisconsortes, con especial atención respecto a la propuesta del órgano de auxilio judicial que se ha designado; el segundo, estudiar la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil orientada hacia el incumplimiento de las obligaciones, como argumento; y por último, analizar la necesidad de incorporar una regla de responsabilidad civil sobre las partes procesales, que propone un órgano de auxilio judicial que incumple con sus obligaciones y por ende con la finalidad del proceso.

Toda esta construcción se muestra en el contenido del Capítulo I, en el cual se detalla además la percepción de las razones justificantes que permiten llevar a cabo la investigación en función a los intereses de corte social como punto de partida de la intervención del derecho y desde luego en lo que corresponde al interés civil que se relaciona con la ejecución de las sentencias y el cumplimiento de sus mandatos, lo que conlleva a la consagración de la seguridad jurídica.

Luego en función a la guía de los objetivos específicos se han agregado contenidos a la investigación, teniendo así la construcción del Capítulo II que se

refiere a las facultades que tienen las partes procesales, los litisconsortes y la propuesta del órgano de auxilio judicial; el cual ha tenido como punto de partida la descripción de los trabajos previos a la investigación con el fin de establecer la ruta de trabajo que asumió la postura de la tesis.

Seguidamente en el Capítulo II, referido a la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil ante el incumplimiento de las obligaciones, lo cual ha incorporado los contenidos teóricos básicos que permitieron identificar los elementos jurídicos que conllevan al reconocimiento de la responsabilidad y la sugerencia del resarcimiento de los daños.

Para la construcción del Capítulo III, se plasmó el análisis de la realidad, mediante los resultados obtenidos al revisar las resoluciones que dentro del proceso de ejecución respecto a la empresa Agropucalá han generado la dilación del cumplimiento de la sentencia que ordena la liquidación, además de la observación de los expertos que validaron los planteamientos de la investigación mediante la aplicación de una encuesta.

Por último, el Capítulo IV, referido a la contrastación de la hipótesis, se ha ocupado de la discusión de cada una de las metas de la investigación plasmada entre los objetivos específicos, cuyo discurso crítico permitió adoptar las tomas de postura, que conllevaron mediante la síntesis ordenada en función a las variables, establecer la determinación final de la investigación. Ejercicio que llevó al establecimiento de las determinaciones específicas que en tanto conclusiones se relacionan con cada uno de los objetivos específicos; así como también de acuerdo a dichos planteamientos se elaboraron las recomendaciones.

El Autor.

Capítulo I

Aspectos Metodológicos

Este capítulo inicial se ha construido con la finalidad de plasmar el enfoque que ha tomado la investigación, así pues se muestran los aspectos más resaltantes como es el hecho de que la realidad problemática incorpora tanto el planteamiento como la formulación del problema orientados a un fin que es el reconocimiento de la responsabilidad civil de las partes procesales en razón de la designación del órgano de auxilio judicial que no cumple con las funciones para las que se destina su participación.

Esta sección además incorpora elementos trascendentales como son la justificación de la investigación que se proyecta sobre ámbitos importantes como son el social que sin duda alguna tiene relación directa con el origen del derecho y como tal justifica la observación de las reglas para ajustarlas a las necesidades que se generan en la sociedad y su interrelación jurídica. Además de ello se concentra la observación de la realidad que se desprende del planteamiento del problema en función a los métodos de investigación que se han aplicado, que parten desde la interpretación de las reglas jurídicas que intervienen en el razonamiento justificante de la propuesta, hasta la observación de la realidad mediante la incorporación de inferencias para llegar a determinar una hipótesis dotada de certeza.

1.1. Realidad problemática

1.1.1. Planteamiento del problema

Según lo que conviene a las investigaciones jurídicas como en la que se embarca esta tesis, debe revisarse el planteamiento del problema de manera inicial desde el aspecto que conviene a la sociedad, esto es el aspecto socio jurídico, dado que los problemas de corte social son los que dan origen al derecho mismo como regla, así la circunstancia que opera sobre la seguridad jurídica que debe ser la constante de los procesos judiciales ha de ser controlada a fin de identificar la existencia de problemas.

Atendiendo a dicha circunstancia debería puntualizarse el aspecto que se concibe como tal, así pues sobre la seguridad jurídica se puede tomar la definición que aporta el profesor Cea (2004), que muestra en su investigación titulada “La seguridad jurídica como derecho fundamental”, en el que señala que se trata de una: “(...) situación psicológica de la persona que, en cuanto sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, conoce el ordenamiento objetivo que debe cumplir, sabe que este sistema normativo es generalmente observado y confía en que así continuará ocurriendo”. (p. 47)

Según lo que se aprecia se trata de una condición personal que bien se puede reflejar en lo que el tema de la proyección pretende reflejar sobre el hecho de que las actuaciones procesales tienen que brindar la mayor prolijidad jurídica con el fin de asegurar esta situación de seguridad, lo cual se refleja en todos los ciudadanos, consolidándose como un bienestar general; es por ello importante encaminar la investigación sobre el camino de la revisión de las circunstancias negativas que refleja el incumplimiento de las condiciones que se esperan del proceso en ejecución de sentencia.

Esta característica que se asume como una suerte de control que corresponde al Estado a través de la configuración de las reglas, para el caso del proceso civil, interesa verificar la actividad jurisdiccional que corresponde a la resolución de conflictos en los cuales se incluyen bienes e intereses comunes, requiere de la atención de las pretensiones solicitadas con la participación de los sujetos procesales, a ese nivel se asume que las decisiones que ha de tomar el juzgador deben orientarse en función a las reglas de las partes procesales.

En función a ello y al tener que realizar el examen de la eficacia de las reglas a nivel jurisdiccional, se tendrá que iniciar con la base de la interpretación de la regla que al ser de un tipo procesal será conveniente la aplicación de una de tipo teleológica, así pues el catedrático mexicano Anchondo (2012) quien en su artículo jurídico que lleva por título Métodos de interpretación jurídica, en el cual señala sobre ello que: “Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto”. (p. 48)

Siendo así es que debe admitirse que la finalidad del proceso es dar por satisfecho el reconocimiento de los derechos lo cual se consolida a través de la sentencia cuyo proceso de ejecución se desarrolla bajo ciertas reglas procesales, las mismas que interesa analizar en función de su finalidad, es así como se aprecia para ciertos casos especiales al requerirse la designación de un órgano de auxilio judicial, se otorga la potestad para que una de las partes del proceso, ya sea demandante, demandado o litisconsortes, asuman la facultad de proponerlo con el objetivo de coadyuvar a cumplir con lo ordenado por el juzgador; sin embargo, en la práctica se ha podido observar que dichos órganos de auxilio judicial no cumplen a cabalidad con sus obligaciones, las mismas que se presume soluciona el conflicto, esta circunstancia se repite de forma constante propiciando no sólo un desajuste de

la estabilidad económica o patrimonial del negocio o del bien administrado, sino que atenta con el principio de autoridad del órgano jurisdiccional; por lo mismo que, se advierte la posibilidad de atribuir responsabilidad civil a las partes procesales, que hubieran propuesto la designación del órgano de auxilio judicial que recae en incumplimiento, debido a que ha propuesto un órgano de auxilio judicial incompetente que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones esenciales.

1.1.2. Formulación del problema

¿Cuál sería el fundamento jurídico que encontraríamos para responsabilizar civil y procesalmente a las partes de un proceso que hayan propuesto la designación de un órgano de auxilio judicial que no haya cumplido con sus obligaciones?

1.2. Justificación e importancia de la investigación

1.2.1. Justificación

En lo que respecta a la evaluación de las razones por las cuales se decide el desarrollo de esta investigación, se ubican ciertos aspectos que lo justifican como es el hecho de su relación con el efecto social que desencadena la ausencia de control respecto a la libertad que tienen las partes para poder designar a los órganos de apoyo con el fin de que se ejecute el fallo establecido por el sistema de justicia; todo ello se puede calificar como un problema social en razón de la percepción de la sociedad como ineficacia del propio sistema judicial para que se cumplan las sentencias que se determinan como resultado de su potestad.

De otro lado se puede reconocer la justificación legislativa, puesto que se advierte un elemento de control que no está surtiendo el efecto necesario a fin de lograr el objetivo de las sentencias, es decir, que las partes procesales para el caso

particular que se observa de la administración del negocio que se encuentra en liquidación, debería conseguir los fines que se espera según lo establecido en el fallo, lo cual no se logra, denotando ausencia de eficacia de la regla, esto es no cumple su fin de control, por lo mismo que se han de evaluar los factores que determinan dicha condición a fin de poder hacer la propuesta respectiva de cambio.

Finalmente, y en el caso en concreto analizado, es de notarse que las decisiones judiciales no están surtiendo efectos concretos en la sociedad, toda vez que, en el proceso para la ejecución de las sentencias, se emplean mecanismos mal utilizadas por los mismos accionantes para sus propios fines e intereses particulares, generando con ello problema y caos social y una tendencia a calificar de ineficaz a la administración de justicia.

1.2.2. Importancia

El enfoque de esta proyección académica se orienta hacia el reconocimiento de la ausencia de control para el desarrollo de la ejecución de un fallo que se orienta al cumplimiento de acciones con el fin de satisfacer la liquidación de un negocio a través de su administración, por lo mismo que la propuesta de regulación adecuada a través de la imposición o reconocimiento de responsabilidad de las partes procesales que se ocupan de la designación de los órganos de apoyo, se vincula como un beneficio de dos tipos.

El primer tipo de beneficiarios serán las propias partes intervinientes, pues se estará complementando el fallo con su ejecución correcta en tanto la administración del negocio, lo cual trae una consecuencia indirecta para toda la colectividad dado que dota de mayor seguridad jurídica en el ámbito de la ejecución de las sentencias que se dictan en el sistema judicial.

1.3.Objetivos

1.3.1. Objetivo general

- Determinar el fundamento jurídico que sirva para sustentar que la facultad que tienen las partes procesales al proponer al órgano de auxilio judicial que coadyuve a resolver el conflicto, le pueda generar responsabilidad civil, ante el incumplimiento de las obligaciones del referido órgano de auxilio judicial.

1.3.2. Objetivos específicos

- Desarrollar doctrinariamente las facultades de las partes procesales, entre ellas de los litisconsortes, con especial atención respecto a la propuesta del órgano de auxilio judicial que se ha designado.
- Estudiar la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil orientada hacia el incumplimiento de las obligaciones, como argumento.
- Analizar la necesidad de incorporar una regla de responsabilidad civil sobre las partes procesales, que propone un órgano de auxilio judicial que incumple con sus obligaciones y por ende con la finalidad del proceso.

1.4. Hipótesis

Si existiría un fundamento jurídico de carácter procesal, que regule la responsabilidad civil de las partes del proceso por haber propuesto a un órgano de auxilio judicial que ha incumplido con sus obligaciones, **se evitaría** que se busque proponer a un órgano de auxilio judicial con intereses particulares y con ello dilatar el cumplimiento del objetivo para el cual fue propuesto y designado.

1.5. Variables

1.5.1. Variable independiente

La responsabilidad civil ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial, propuesto por las partes del proceso.

1.5.2. Variable dependiente

La facultad de las partes procesales para proponer el órgano de auxilio judicial.

1.6. Tipo de investigación

El desarrollo de la presente investigación supone la enmarcación en uno de los tipos establecidos a fin de seguir las reglas que permitan llegar al puerto de la comprobación de la propuesta planteada, por lo mismo que se ha considerado concebirla inicialmente como una de tipo básica, descriptiva en razón al fin y el diseño que se persigue; desde luego esta calificación puede variar en el proceso evolutivo de la investigación.

De acuerdo al fin que persigue.

Básica:

Esta investigación se considera dentro del grupo de las de tipo básicas en tanto que con el análisis de la realidad se pretenderá hacer la sugerencia de cambios en el esquema normativo con el fin de ampliar la regla de responsabilidad civil hacia las partes del proceso en tanto que los resultados del órgano de apoyo designados por ellas no cumplan con las funciones ejecutoras establecidas en su finalidad.

Para definir el tipo de investigación según el fin que se persiguen con nuestra proyección, nos basamos en la aportación del investigador Cegarra (2004), quien desarrolla una definición más puntual diciendo:

La investigación Básica es la que tiene como objetivo esencial, a medio o largo plazo, contribuir a ampliar, intensificar y aclarar todos los campos de la ciencia sin otras implicaciones inmediatas. Lo cual no excluye que esta búsqueda desemboque en importantísimas aplicaciones, lo que sucede con frecuencia. (pág. 42)

Esta investigación se considera dentro del grupo de las de tipo básicas dado que con el análisis de la realidad se pretenderá hacer la sugerencia de cambios en el esquema normativo con el fin de ampliar la regla de responsabilidad civil hacia las partes del proceso en tanto que los resultados del órgano de apoyo designados por ellas no cumplan con las funciones ejecutoras establecidas en su finalidad.

De acuerdo al diseño de investigación.

Descriptiva:

Para determinar este tipo de diseño elegido, debemos conocer primero las razones que nos ayudaron a definirla, para lo cual citamos a Hernández, Fernández y Baptista (2010), quienes detallan lo siguiente:

(...) es posible encontrar diferentes clasificaciones de los diseños. En esta obra adoptamos la siguiente clasificación: investigación experimental e investigación no experimental. A su vez, la primera puede dividirse de acuerdo con las clásicas categorías de Campbell y Stanley (1966) en: pre experimentos, experimentos puros y cuasiexperimentos. La investigación no experimental la subdividimos en diseños transversales y diseños longitudinales. Dentro de cada clasificación se comentarán los diseños específicos”. (pág. 121)

Dentro de la misma bibliografía, ubicamos que en el esquema de los diseños transversales existen otros diseños del cual escogemos el tipo de diseño de

investigación descriptiva, dado a que la recolección de los datos se ha realizado en un solo acto para verificar la realidad.

En el ámbito consignado como descriptiva se puede señalar que esta investigación se ha servido del análisis de la realidad, describiendo los hechos que propicia la actual regla de responsabilidad civil la misma que no alcanza de manera suficiente para el reconocimiento de esta condición respecto a las partes que intervienen en el proceso designando el órgano de apoyo para la administración del negocio y el cumplimiento de la finalidad ejecutora del fallo establecido.

1.7.Métodos

Teniendo en cuenta el tipo de investigación no experimental que se desarrolla, se ha considerado la aplicación de ciertos métodos para la ejecución del análisis que se pretende lograr respecto a la posibilidad de ampliar la aplicación de la responsabilidad civil hacia las partes del proceso que aparezcan involucradas en la circunstancia que designa o propone el órgano de auxilio judicial; para este fin se ha creado un esquema de análisis enmarcado en dos ámbitos, el primero que se refiere a la interpretación de la regla que se involucra en dicho problema, y lo segundo relacionado con la observación de la realidad de los procesos en los que la ejecución de los órganos de auxilio judicial juega un papel preponderante.

1.7.1. Método exegético jurídico

Teniendo en cuenta que la exégesis se refiere a la interpretación de las leyes en su sentido literal o gramatical a fin de reconocer el verdadero sentido que el legislador ha querido plasmar, este método exegético se ha escogido con el fin de reconocer con la mayor exactitud posible el contenido de la regla procesal que indica a las partes para indicar el alcance de sus acciones dentro del proceso, lo

cual ha permitido concentrar la idea en la necesidad de hacer ciertos ajustes para que las condiciones planteadas en el ordenamiento permitan luego atribuir la responsabilidad civil ante un eventual incumplimiento, que para este caso se relacionará con las acciones del órgano de auxilio judicial.

1.7.2. Método sistemático

Este método se ha escogido con la finalidad de alcanzar los elementos necesarios que coadyuven a la ejecución de la regla antes analizada, esto es la que muestra en el ordenamiento las obligaciones y funciones de las partes procesales, lo cual invita al razonamiento de una relación jurídica en función a su entorno en el propio esquema civil. Esta vinculación se observará en primer lugar desde un punto de vista normativo, esto es su relación y coincidencia con las garantías que ofrece la Constitución Política para evitar la vulneración de los derechos fundamentales, entre los cuales se aprecia el debido proceso.

De otro lado también se tiene en consideración el examen de dicha regla respecto a la finalidad de esta tesis, puesto que se pretende ampliar la concepción de responsabilidad civil para las partes que intervengan de manera inidónea en el proceso en su relación directa con la ejecución de las labores del órgano de auxilio judicial; por ello es que la interpretación sistemática operó sobre su relación con la responsabilidad civil en tanto figura jurídica normativa, a fin de reconocer la viabilidad de la propuesta planteada.

Capítulo II

Marco teórico

2.1. Las facultades de las partes procesales, los litisconsortes y la propuesta del órgano de auxilio judicial

Es importante considerar el desarrollo de esta sección de la investigación como primer elemento de la base teórica en tanto que ha permitido reconocer el nivel de las facultades que le corresponde a las partes procesales, así como a los litisconsortes a fin de poder establecer esta vinculación procesal con el acto de propuesta de los órganos de auxilio judicial que se entiende se incorporan al proceso a sugerencia de las partes con el fin de cumplir la ejecución de la sentencia.

Previamente se habrá de tener en consideración el nivel de conocimiento que se ha logrado a nivel académico respecto al tema, por lo cual se ha encontrado solo un estudio que se acerca al enfoque de la investigación, el cual se ha tomado como punto de partida para lograr el razonamiento que proyecta responsabilidad civil de las partes procesales que designan el órgano de auxilio judicial.

2.1.1. Antecedentes de la investigación

En lo que corresponde a los antecedentes de la investigación se han tomado las referencias de trabajos previos desarrollados en relación al tema que se estudia, así pues se ha podido encontrar en uno solo de los trabajos académicos la fortaleza

de postura que permite solventar la propuesta. Esta percepción es lo que permite reconocer el nivel de conocimiento que se alcanzó de manera previa a la investigación.

Como antecedente se toma la investigación desarrollada por el investigador Carreta Muñoz Francesco (2008) quien en su artículo jurídico titulado “*Deberes procesales de las partes en el proceso civil Chileno: Referencia a la Buena fe procesal y al deber de coherencia*”, en el que señala en sus conclusiones lo siguiente:

El proceso, por tanto, también está cubierto por este nivel subjetivo, porque también requiere de una directriz ética que le sirva de guía en la consecución de los actos que la conforman. La faz axiológica del proceso, distinta al ingrediente axiológico de todas las normas jurídicas, se concreta a través de los deberes procesales que nacen de las consideraciones éticas que el legislador prevé cuando dicta preceptos que contienen el imperativo, o, a falta o insuficiencia de ley, cobra aplicación la creación jurisprudencial que en ese caso se constituye en su origen. Los deberes procesales no actúan aisladamente. Su progreso cobra fuerza inicial a través del ejercicio de un derecho subjetivo procesal, sustentándose diferenciadamente y en yuxtaposición con las cargas y las obligaciones. La interconexión de todos los factores propende a la armonía que cualquier sistema debe contener. (p. 123)

Es importante tomar como base de esta investigación, el sentido que aporta el trabajo citado, dado que se proyecta sobre la necesidad del establecimiento del control respecto al comportamiento de las partes en el desarrollo del proceso, por lo mismo que se toma la postura esencial de verificación del cumplimiento de las reglas tanto objetivas cuanto subjetivas, siendo estas últimas las que se ha podido

considerar como el aspecto que se estaría incumpliendo al participar de manera inadecuada en el nombramiento de órganos de auxilio judicial para la administración del negocio.

El problema desde luego aparece ante la circunstancia que muestra el incumplimiento de los fines que le corresponden a dicho órgano de auxilio judicial como es el caso de la convocatoria a junta de socios en un periodo determinado, en el mismo que se observa más bien otro tipo de intervenciones menos la que corresponde a la función para las que fueron designados.

Como se puede apreciar el nivel de investigación sobre el tema que se aborda en esta tesis es bastante limitado, por lo mismo que solamente se ha podido incorporar un indicador, lo que conlleva a presumir que en la realidad académica hace falta desarrollar elementos de observación sobre el tema planteado, esto es que tan posible resulta incorporar la determinación de responsabilidad para aquellas partes que designan al órgano de auxilio judicial, en tanto que este último no cumple con las funciones asignadas respecto a la ejecución de la sentencia.

2.1.2. Las partes en el proceso civil

Sin duda los sujetos que intervienen en todo proceso judicial son: el Juez, las partes, los terceros, el abogado, los órganos de auxilio judicial, los auxiliares jurisdiccionales entre otros. Empero, la noción de partes se atribuye específicamente a dos: a los sujetos determinantes del desarrollo del proceso, es decir, al sujeto activo o parte demandante y al sujeto pasivo o parte demandada,

pues el desarrollo de todo proceso judicial se basa en el principio de bilateralidad o dualidad de las partes.

En tal sentido, las partes procesales son los sujetos que intervienen en un proceso judicial para reclamar una determinada pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por otro sujeto. De modo que, la persona que ejercita la acción se denomina actor (parte impulsadora), comúnmente llamado demandante; mientras que, a la persona que se resiste a una acción se la llama parte demandada, o, simplemente demandado. (Álvarez del Cuvillo, 2008, pág. 1)

Partes procesales son los agentes que “en un juicio jurisdiccional tienen aptitud para realizar actos procesales, cual fuere la posición que ocupen en éste; la doctrina diferencia entre quienes tienen la calidad de parte, terceros e intervinientes; el concepto de sujeto procesal es omnicomprendivo de todos ellos”. (Ortiz Alzate, 2010, pág. 52)

El sujeto activo, será aquel que presenta la demanda, dando inicio al desarrollo del proceso; en tanto, el sujeto pasivo será aquella persona contra quien se interpone dicha acción. Después de ser presentada la demanda, y de ser calificada, deberá ser notificada al demandado, para que pueda hacer ejercicio a su derecho de defensa. (Franciskovic Ingunza, 2015, pág. 280)

Esto significa, “sólo serán partes aquellos entre los cuales se establece o se constituye la relación jurídica procesal compleja a partir de la notificación de la primera providencia integradora del contradictorio, es decir, prima el carácter formal o procesal, sin importar que el actor sea o no titular del derecho material debatido ni que el opositor, igualmente, sea o no titular de dicho derecho o relación”. (Ortiz Alzate, pág. 53)

Desde el punto de vista material, el concepto de parte hace referencia a aquellos que reclaman y debaten como suya, siendo estos efectivamente los titulares, la relación jurídica sustancial. Lo importante es que se persiga decisión judicial de fondo estimatoria o desestimatoria de la pretensión invocada, o de otro lado, la ejecución forzada del derecho cierto e insatisfecho argüido como título ejecutivo. (Agudelo Ramírez, 2003, pág. 67)

Tal y como los jueces deben cumplir con ciertos requisitos para poder asumir un proceso; las partes del proceso, demandante y demandado deben cumplir con determinados requisitos de forma para poder apersonarse al proceso y hacer uso de su derecho de acción a través de la presentación de la demanda. Estas exigencias de forma que deberán cumplir ambas partes, son la capacidad procesal y legitimidad para obrar.

Para un mayor alcance sobre que sujetos pueden ser parte de un proceso, es necesario aproximarnos hacia la concepción de capacidad y legitimación; por un lado, la capacidad es la aptitud abstracta para ser parte en cualquier proceso legal, dicha capacidad equivale al goce de derecho, aunque se identifica con la capacidad para ser sujeto de derecho. (Satta , 1971, pág. 85)

La capacidad procesal en principio la adquiere cualquier persona a partir de los dieciocho años, con excepción de los incapaces absolutos y relativos, de las menores de 14 años que hayan dado a luz, o los menores de 16 que hayan contraído matrimonio o cuenten con título oficial que les permita ejercer una presión u oficio, quienes adquieran capacidad procesal solo para algunos temas de familia, conforme lo establece el Art. 46 del Código Civil, pueden actuar en el proceso mediante sus representantes legales, sus padres o tutores y, o curadores respectivos. En los demás

supuestos, toda persona natural puede ejercer por sí mismo sus derechos y obligaciones procesales. (Franciskovic Ingunza, 2015, pág. 281)

La legitimidad para obrar, a diferencia de la capacidad para ser parte del proceso o de la capacidad procesal la legitimidad para obrar constituye una condición de la acción, es decir, es un requisito para un pronunciamiento sobre el fondo; la omisión de la legitimidad para obrar del demandante generaría la consecuencia de declarar improcedente la demanda. (pág. 283)

De tal forma que, cuando se hace referencia a quienes pueden ser parte de un proceso, se realiza de manera abstracta o en concreto, de manera abstracta se hace referencia a dos escenarios: a) capacidad para ser parte en el proceso; y, b) capacidad para ser parte procesal. De manera concreta se hace referencia a la legitimación. (Prado Bringas & Zegarra Valencia, 2016, pág. 299)

El punto de arranque ha de consistir en tener claro lo que significa el principio de oportunidad en el proceso civil; este principio responde a la concepción que da primacía a los intereses individuales, se basa en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de los derechos subjetivos, y lleva a que la tutela jurisdiccional de los mismos sólo pueda actuarse, mediante la aplicación del Derecho objetivo, precisamente cuando alguien la inste. En forma que, de entrada, el proceso solo tendrá sentido si el que lo insta afirma su titularidad del derecho e imputa la titularidad de la obligación al demandado. (Montero Aroca, Ortells Ramos, & Gómez Colomer, pág. 14)

Puede ocurrir que, “la posición de las partes cambie en el transcurso del proceso. Por ej., determinado sujeto puede ser llamado a un proceso como demandado para darle la oportunidad de defender sus intereses y esta parte puede decidir asumir las pretensiones del demandante y defenderlas frente a otros

demandados”. El rol es posible de intercambiar, a través de la reconvención; esto implicará que el demandado reclame a su vez una determinada pretensión al demandante. (Álvarez del Cuavillo, 2008, pág. 1)

En la mayoría de los casos las partes acuden directamente al proceso, por sí solos o por medio de apoderado y permanecen durante todo el transcurso del proceso; cuando ello no es posible, estamos frente a la figura de la sucesión procesal, regulada por el Art. 108 del Código Procesal Civil.

De conformidad con el artículo mencionado, la sucesión procesal ocurre en los eventos de desaparición o extinción de la persona que venía ocupando la posición de parte, extinción de la persona jurídica por adquisición o traspaso de la universalidad de sus derechos y obligaciones, o cuando se adquiere sólo el derecho o la cosa en litigio. (Ortiz Alzate, 2010, pág. 53)

2.1.3. Función de los litisconsortes

Para llegar a profundizar sobre las funciones de aquellos sujetos partícipes de un litisconsorcio, primero, compete saber que por litisconsorcio se entiende a la situación jurídica en la cual dos o más personas litigan de forma conjunta como demandantes o demandados; dado que tienen una misma pretensión, sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse contra una de las personas pudiera afectar a otra misma.

Monroy (1993) denomina al litisconsorcio como una acumulación subjetiva, la cual puede ser originaria o sucesiva. En ese orden, podrá ser originaria cuando la demanda es interpuesta por varias personas o contra varias personas; y, podrá ser sucesiva cuando un tercero legitimado incorpora al proceso otra u otras pretensiones

o cuando dos o más pretensiones intentadas en dos o más procesos autónomos, se reúnen en un proceso único, por existir conexidad. (Monroy Gálvez , 1993)

La figura jurídica del litisconsorcio constituye la pluralidad de sujetos en uno de los polos de la demanda, pudiendo ser demandantes o demandados. No obstante, puede haber sujetos ubicados en uno de los polos de la demanda, pero no por ello deben ser considerados como demandantes o demandados; ya que el sujeto coadyuvante se coloca en uno de ellos, pero no es parte. (Cavani, 2016, pág. 1)

De modo tal, que los litisconsortes son aquellos sujetos procesales legitimados, a los que se extienden los efectos jurídicos de una sentencia, con ocasión de alguna situación fáctica. Por lo tanto, están facultados para intervenir, si así lo desearan, ya que como parte dentro del litigio, pueden solicitar pruebas, siempre y cuando lo hagan antes de que se decreten las que solicitan las partes que iniciaran el proceso, o si este litisconsorte llega al proceso después del auto que decreta las pruebas, deberá ajustarse a la etapa procesal en la que se halle el proceso.

Otra parte de la doctrina, sobre los litisconsortes, refieren acerca de un instituto que permite a quien es un tercero al momento inicial del proceso se incorpore a éste adquiriendo la calidad de parte otorgando el derecho de defensa en sentido amplio si acredita determinado interés a los fines de que se le otorgue la participación de ley. (Castillo Yataco, 2008)

Existirá litisconsorcio cuando en un proceso o litigio aparecen varios sujetos en una o ambas partes; reviste la situación jurídica en que se hallan diversos sujetos que actúan en juicio conjuntamente, como actores o demandados. Hay muchas maneras de clasificar al litisconsorcio, optando por concebirlo, desde el momento de su formación; el litisconsorcio puede ser necesario, cuasi-necesario y facultativo. (Véscovi, pág. 171)

Quizá el litisconsorcio más conocido, es el litisconsorcio necesario, éste se da cuando dos o más personas se constituyen en un proceso, en la posición de actor y/o demandado, ya que están legitimadas para ejercitar una única pretensión o para oponerse a ella, de modo que el juez debe dictar una sentencia única en la que se contendrá un solo pronunciamiento que afectará a todas las partes.

El fundamento central del litisconsorte necesario radica en que hay relaciones jurídicas sustanciales sobre las cuales no es posible pronunciarse por partes, fraccionándolas o calificándolas sólo respecto de algunos de los sujetos, porque la decisión comprende y obliga a todos. En estos casos la presencia en el proceso de todos los sujetos vinculados a esa relación se hace indispensable a fin de que la relación jurídica procesal quede completa y se pueda decidir sobre el fondo de ella. (CAS. N° 3921-2014)

Dentro de esta tipología de litisconsorcio, Bringas & Zegarra (2016) muestran una sub-clasificación: “a) El litisconsorcio propio, que existe cuando es la ley la que señala que dos o más personas deben demandar o ser demandados de manera conjunta. De otro lado, se tiene al b) El litisconsorcio impropio, que se desprende de la naturaleza de la relación jurídico-material respecto de las afirmaciones legítimas que hacen las partes”. (pág. 302)

“En tal sentido, existirá litisconsorcio necesario impropio cuando sea ineludible para que pueda concluirse que existe legitimación que la afirmación activa la hagan todos los titulares del derecho y/o que la imputación pasiva se haga frente a todos los titulares de la obligación”. (Montero Aroca, 2007, pág. 221)

De esto se traduce la idea de que la existencia de esta figura bajo la nominación de necesaria en función al litisconsorcio con la característica de ser legitimado, puesto que las partes es posible que afirmen dicha condición, por lo mismo que es posible imputar pasivamente ante las partes de las obligaciones de manera general.

“Respecto a la actuación de los sujetos que integran el litisconsorcio en el proceso, si bien existe legitimación plural y constituyen un solo demandante o demandado, no significa que deban de actuar de manera conjunta. La regla general constituye la actuación individual de cada uno, siendo la excepción que actúen de manera conjunta cuando el juez lo ordene de ese modo”. (Prado Bringas & Zegarria Valencia, 2016, pág. 303)

Este tipo de actuación que se evidencia como particular se muestra como la potestad que permite la adopción de posiciones de tipo material y procesal diferentes, por lo cual comparecen los sujetos procesales con un letrado independiente a fin de establecer el alegado de manera independizada que pueden terminar siendo de carácter contradictorio, ello con la intención de respaldar la fundamentación de su teoría.

Por otro lado, existe un litisconsorcio cuasi-necesario, considerado como una figura intermedia entre el litisconsorcio necesario y el voluntario, se origina cuando por autorización de la ley se permite que el proceso se desarrolle emplazando sólo a uno de los varios sujetos legitimados pasivos, permitiendo que

la sentencia a emitirse sea vinculante a todos ellos. (Prado Bringas & Zegarra Valencia, 2016, págs. 303-304)

Debe indicarse además que la secuencia procesal que se inicia frente al litisconsorcio cuasi necesario en el que se podrá hacer participar al resto de los que se comprenden como sujeto legitimado, lo cual puede suceder durante toda la secuencia procesal en cualquiera de su fase previa a la emisión del fallo final definitivo; así los sujetos que participan disfrutan de facultades iguales a las que corresponden a quien se emplaza con el proceso a partir de sus admisión como interviniente.

Finalmente, se tiene al litisconsorcio facultativo, que “constituye un supuesto de acumulación objetiva-subjetiva y de legitimación originaria y/o eventual. Este tipo de litisconsorcio implica la pluralidad de objetos procesales (pretensiones) que conllevarán a una sentencia con tantos pronunciamientos como pretensiones existan entre varios demandantes y/o demandados”. (Prado Bringas & Zegarra Valencia, 2016, pág. 304)

Cabe hacer la precisión de que el hecho de acumular bajo el criterio objetivo o subjetivo de tipo originario se genera cuando llega el tiempo de presentar el escrito demandante. Por lo que , trasladándose de un litisconsorcio facultativo llegará a proceder cuanto la pretensión devenga originalmente de un solo título, refiriéndose a objetos del mismo tipo a uno único y hasta en tanto se registre conexión.

“Cada integrante del litisconsorcio facultativo debe acreditar legitimación procesal autónoma. De manera que, solamente podrán configurar un litisconsorcio facultativo quienes estuviesen legitimados para discutir por sí e independientemente de los otros litisconsorcios, la relación jurídica sustancial que hiciera al litigio. El juez deberá analizar exhaustivamente el pedido de intervención y relación jurídica material a ser discutida para poder incorporarlo como litisconsorte facultativo”. (Ledesma Narváez, 2008, pág. 228)

Al juez le bastará, en su decisión, ordenar la incorporación como litisconsorte necesario o facultativo; la existencia o no de unilateridad es algo que interesará al momento de sentenciar, pues el verdadero punto importante es que al trabajar con estas categorías ayuda al juez a determinar con mayor exactitud a aquellos que tienen que estar en el proceso, y a aquellos que simplemente pueden estar. (Cavani, 2016, pág. 6)

En síntesis de lo expuesto anteriormente, la participación o intervención de estas personas en el proceso es necesaria e imprescindible, a fin de obtener una sentencia de mérito o de fondo. De tal manera que sólo los sujetos legitimados (nos referimos a los litisconsortes), pueden formular o contradecir la pretensión contenida en una demanda. (Pacherres Pérez, 2002, pág. 5)

2.1.4. El desempeño de los órganos de auxilio judicial

En lo que corresponde a la comprensión de las labores que se les asigna a los órganos de auxilio judicial, se debe comprender su naturaleza de participación y quizá el sentido de responsabilidad que también pudieran ser comprendidas en los lineamientos que esta investigación pretende invocar para las partes procesales, ello teniendo en cuenta lo señalado por la investigación de Prado (2007) en su artículo

de revista jurídica titulado “Reflexiones en torno a los deberes de conducta de las partes y sus abogados”, en cuyo trabajo llega a determinar que:

“(...) los órganos de auxilio judicial, los que asumen el compromiso de participar –según sus funciones- en un proceso judicial cuando el Juez así lo ordene, como el caso de los peritos, martilleros o curadores procesales, quienes se encuentran empadronados en un registro –previo concurso y evaluación- que es manejado por los Jueces a fin de convocarlos cuando la ley así lo establezca. La resistencia al cumplimiento de dichos deberes o la renuencia a cumplir con los requerimientos/mandatos del Juez puede conllevar a la aplicación de ciertas sanciones. Ello en virtud de las facultades genéricas, disciplinarias y coercitivas de las que el Juez se encuentra investido”. (Prado Monge, 2007)

Como resultado de la observación de la cita, existe el condicionamiento de la ejecución de los actos que le corresponden a los órganos de auxilio judicial, por lo mismo que se verifica la existencia de una suerte de control que en la realidad no se aplica para el caso de los procesos en los que a nivel de ejecución de la resolución judicial, se nombran estos órganos a fin de que cumplan con una convocatoria, labor que no se desarrolla puesto que sólo se aprecia acciones de administración; siendo así, en mérito a este incumplimiento se ha visto como una posibilidad jurídica el hecho de incorporar en el ordenamiento la regla que permita atribuir responsabilidad a quienes deciden esta elección.

Para este caso se estaría hablando de una cuestión de intervención judicial, sobre lo cual se ocupa de hablar Gallardo (2000) quien en su investigación titulada “Cautela y Contracautela en el Proceso Civil”, señala que: “ (...) se denomina intervención judicial a la medida cautelar en cuya virtud una persona designada por el Juez, en calidad de auxiliar externo de éste, interfiere en la actividad económica

de una persona física o jurídica, sea para asegurar la ejecución forzada o para impedir que se produzcan alteraciones en el estado de sus bienes”. (p. 67)

2.2. La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil frente al incumplimiento de obligaciones

Para el desarrollo de este capítulo se ha tenido en cuenta la marcación del segundo objetivo específico comprendido como meta de la investigación, así pues el reconocimiento de la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil tendrá como finalidad adoptar una postura sobre el concepto que permita establecer la posibilidad de que se puedan atribuir estas condiciones de responsabilidad bajo el carácter civil con la intención de que se relacione con el incumplimiento de las obligaciones.

No solo se trata de la recopilación de información que permita reconocer el concepto más adecuado de la responsabilidad civil, sino además, conseguir adoptar la postura más idónea respecto a los efectos que produce su aplicación, en tanto control de la legalidad y la efectividad de la ejecución de las decisiones judiciales. Por todo ello se ha estructurado un esquema que conlleve a la materialización de su finalidad comprendiendo la definición de la figura, la comprensión del incumplimiento de las obligaciones, así como el aspecto que se refiere a la posibilidad de una responsabilidad civil de las partes del proceso civil.

2.2.1. Definición de responsabilidad civil

Para lo que se requiere como una definición de esta figura es preciso tener en consideración el sentido originario del término, por lo mismo que “etimológicamente, el término responsabilidad proviene del latín *responderé*; al respecto el profesor peruano León (2007), difiere: Responder es como prometer a

la vez o como corresponder a una promesa, expresión que comunica un desbalance, una *equiparidad* previamente alterada que da lugar a la imposición de una respuesta, la cual de restablecer el statu quo preexistente, y que se quiere mantener, o bien una secuencia de acciones que deben sucederse con una regularidad y orden que deben ser preservados”. (León Hilario, 2011, pág. 87)

Desde el punto de vista etimológico se puede indicar además que este término asume una condición en el ámbito civil, debido a su vínculo con las obligaciones que promueven una respuesta en razón de las acciones o hechos que se han generado y propician desequilibrio en un estado de cosas, esto es que se altera el normal desarrollo de las actividades que tienen una secuencia de normalidad. “Responder significa dar cada uno cuenta de sus actos, ya que la conducta de los individuos se traduce en actos unilaterales o bilaterales que a su vez producen una modificación del mundo exterior”. (Bustamante Alsina, 1997, pág. 94)

En base a lo estudiado por Estrella(2009), se concibe que, “el derecho de daños, en sentido genérico recibe distintos nombres de acuerdo al sistema jurídico; así tenemos que en España, o en países influenciados por el Código Francés como lo es el caso peruano, el resarcimiento del daño se estudia bajo la premisa de responsabilidad civil, estando que para los países de índole anglosajón es denominado derecho de daños propiamente”. (Estrella Cama, 2009)

Según lo señalado se puede apreciar que la nominación de esta figura de la responsabilidad civil tiene un vínculo de origen con aquello que se concibe como el resarcimiento, acción que se proyecta a reparar las acciones dañosas ocasionadas mediante actos de diversa índole pero que guardan relación con las obligaciones, esto es el compromiso previo establecido entre las partes.

Según De Pina (2001); “la responsabilidad civil en su acepción jurídica, significa tanto como obligación que una persona tiene con respecto a otra de reparar los daños y resarcir los perjuicios que haya ocasionado como consecuencia de un acto propio o ajeno”. Con fundamento en el principio general de responsabilidad, postulado por primera vez en el siglo XVII por el jurista francés Jean Domat; *“Aquél que causa un daño está obligado a repararlo”*. (pág. 317)

Según todo lo recopilado se puede indicar que resulta posible aseverar respecto a esta figura o concepto de responsabilidad trasladado al ámbito del derecho civil, como aquella circunstancia que tiene por finalidad indemnizar, compensar y reparar un daño ocasionado, esto es lo que se ha generado por un agente civil sobre aquel que sufre los embates del perjuicio, siendo así esta última merece la atención a fin de reconocer sus facultades y condiciones.

Por su parte, Díez-Picazo & Gullón (1994) afirma que: La responsabilidad civil representa la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido. (pág. 28)

La responsabilidad civil importa un deber que, como respuesta proporcional, sobrelleva quien ha causado un daño, perjuicio o detrimento, esto es que, el responsable tiene que indemnizar a la víctima; la responsabilidad enfrenta a una pareja con intereses opuestos: víctima y victimario; dañado y dañador; a quien padece de un perjuicio y a quien es agente del mismo. (Mosset Iturraspe, 1997, pág. 115)

Según lo que se conoce como el carácter evolutivo de esta institución referida al reconocimiento de la responsabilidad en el ámbito civil opera en función a las comparaciones respecto a lo que se entiende por su fin, en tanto que resulta de tipo reparador e incluso se puede entender como un efecto que sanciona en razón del perjuicio que se ocasiona. Lo cierto resulta que esta figura jurídica se concibe desde la perspectiva del derecho particular o por la acción generada por el que depende, para lo cual se debe reconocer dicho vínculo dependiente que se establecer sobre el agente de los hechos y los terceros que se entienden responsables desde la perspectiva civil.

En el moderno derecho de daños se pone la mirada en la protección de la víctima, reformulando los presupuestos de la institución de la responsabilidad civil, “en este sentido, las modernas tendencias postulan una reelaboración del fenómeno resarcitorio a partir de la prescindencia del presupuesto de la ilicitud, centrando toda la teoría sobre una nueva estructura, más funcional y dúctil a la hora de brindar una respuesta al permanente problema del daño sufrido”. (Alvarez Solis , 2016, pág. 125)

El daño pasa a ser el presupuesto esencial de la responsabilidad, y la culpa (factor exclusivo), uno de los criterios que, conjuntamente con otros y con igual valor, conforman un sistema policéntrico para la imputación del resarcimiento. Aunque sobre cuestiones de resarcimiento de daños a personas jurídicas u otros de diversa índole, existe un gran desconcierto y poca uniformidad. (Estrella Cama, 2009)

Sin lugar a dudas, muy diverso es el panorama de la responsabilidad civil, que supone, no un perjuicio social, sino el daño a un particular. Empero, a final de cuentas esta responsabilidad civil ha sido definida como la obligación de soportar la reacción que el ordenamiento jurídico vincula al hecho dañoso; la finalidad de esa reacción equivale a la represión del daño, y tan sólo se logra por el Derecho, transfiriendo el peso del daño a sujeto distinto del perjudicado. (González-Alegre Bernardo, 1959)

2.2.2. El incumplimiento de las obligaciones

En determinadas circunstancias, cuando sea necesario nombrar un órgano de auxilio judicial, se faculta a que una de las partes del proceso, ya sea el demandante, demandado o litisconsortes, propongan un órgano con el objetivo de coadyuvar a lo ordenado por el juez. En la realidad jurídica se ha observado que los citados organismos de asistencia judicial no cumplen plenamente con sus obligaciones de resolución de conflictos, situación que se sigue produciendo de forma reiterada en todo el país, atentando evidentemente con el principio de autoridad del órgano jurisdiccional.

En nuestro sistema procesal, es ampliamente conocido que, mediante los órganos de auxilio, las personas que necesitan acudir al Poder Judicial para resolver

un conflicto de intereses, no vean negada esta posibilidad por falta de recursos económicos; pasando el órgano elegido a ser un partícipe más del proceso.

Conforme al Art. 55 del Código Procesal Civil; son órganos de auxilio judicial: el perito, el depositario, el interventor, el martillero público, el curador procesal, la policía y los otros órganos que determine la ley. Antecedente importante a tener en cuenta, es que los integrantes del auxilio judicial, no perciben una remuneración del Poder Judicial, por lo tanto su trabajo se supedita a los denominados honorarios, cuyo monto los calcula el juez teniendo en cuenta la labor realizada en cada caso.

Según Bacre (1986), el beneficio de litigar sin gastos denominado también auxilio judicial o beneficio de pobreza, es la declaración judicial dictada luego del procedimiento respectivo, por la cual se autoriza a quien ha justificado su carencia de recursos y mientras ella perdure a litigar ante los tribunales sin pagar la tasa de justicia ni las costas del juicio, ni dar contracautela. (Bacre, 1986)

El sexto inciso del Art. 109 del C.P.C invoca a los partícipes en el proceso a colaborar con el juez de manera diligente, para poder llevar a cabo las actuaciones procesales. Esta exigencia es más resaltante al tratarse de los órganos de auxilio judicial, que asumen el compromiso de participar, en un proceso judicial cuando el juez así lo ordene, como es el caso de los peritos, martilleros públicos o curadores procesales, quienes están inscritos en un registro operado por los jueces a fin de convocarlos.

La resistencia al cumplimiento de dichos deberes o la renuencia a cumplir con los requerimientos o mandatos del juez puede sobrellevar a la aplicación de ciertas sanciones; ello en virtud de las facultades genéricas, disciplinarias y coercitivas de las que el juez se encuentra investido. (Prado Monge, 2007)

Precisamente, uno de estos órganos es el perito judicial o forense, profesional dotado de conocimientos especializados, que a través de sus estudios superiores, es llamado a emitir dictamen (prueba pericial) sobre puntos relativos a su ciencia, arte o práctica, que versan sobre una controversia judicial; es decir, suministran información u opinión fundada a los tribunales de justicia. Por tanto, la importancia de los peritos radica en que éstos lleguen a los hechos por medio de la técnica, por consiguiente el perito es un instrumento auxiliar del juez, que lo conducirá a revelar la realidad.

Es tal la importancia del dictamen que emita un perito judicial dentro de un proceso o litigio, que el Art. 278 de la Ley Orgánica del Poder Judicial advierte; las irregularidades que sean cometidas por los peritos en el desempeño de sus funciones, son puestas en conocimiento de las instituciones profesionales que los propusieron, sin perjuicio de aplicarse las sanciones que establece la ley.

Por otro lado, el martillero público, es otro de los órganos de auxilio judicial nombrado por el juez, de acuerdo al número correlativo del Registro de Martilleros de cada Corte; la principal función del martillero público, es efectuar la subasta de muebles e inmuebles, ordenada por el juez, entre otras obligaciones que se encuentran establecidas en la Ley del Martillero Público N° 27728.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo VI de la citada Ley del Martillero Público pueden acarrear las siguientes sanciones: Multa; suspensión del registro hasta por dos años; o cancelación del registro. Siendo, la determinación, aplicación y graduación de estas sanciones, competencia de la SUNARP.

El Art. 21 y 22 de la Ley en mención, establece acerca del martillero público por cuya culpa se suspendiere o anulare un remate o subasta, éste perderá su derecho

a cobrar honorarios y gastos; y además responderá por los daños y perjuicios ocasionados; las sanciones que se apliquen serán anotadas en el Legajo individual del Martillero Público.

Sobre el curador procesal, es un abogado que integra los denominados órganos de auxilio judicial, será nombrado por el juez a pedido del interesado que interviene en el proceso, que es el demandante. El Art. 61 del Código Procesal Civil, establece que la principal función del curador procesal es representar los intereses de una parte, (demandada) que no puede comparecer o ha devenido en incapaz.

Existe un reglamento de curadores procesales en cada Colegio de Abogados de todo el país; en el que casi unánimemente coinciden que son obligaciones de los abogados inscritos en el Registro de Curadores Procesales: a) Cumplir con las disposiciones emitidas por los órganos de gobiernos del Poder Judicial, b) Apersonarse al proceso dentro del plazo que fije el órgano jurisdiccional, c) Redactar escritos expresos y categóricos, técnicamente sustentados, d) Presentación oportuna de los escritos de sus patrocinados; y e) Otras obligaciones que se puedan establecer por norma expresa.

Según lo expuesto anteriormente, se considerarán faltas a todas las acciones que comporten acciones u omisiones de carácter voluntario, y desde luego vaya en contra de la obligación o prohibición, así como de la regla normativa puntual que existe respecto al deber del curador procesal, que se establece en la regla específica, no dejando de lado la responsabilidad civil que pudiera surgir en el ámbito penal si se diera el caso.

Por lo general, se entiende como causa que motiva sanciones a estos curadores procesales: “La presentación extemporánea de los escritos por causa imputable al curador; el incumplimiento o la falta de subsanación de los escritos dentro del plazo correspondiente; y/o el aplazamiento de la audiencia o diligencia por causa imputable al curador”. Ahora bien, sobre las sanciones que el curador podrá recibir, varían desde: amonestaciones escritas, multas, suspensiones temporales, subrogación del cargo, o hasta una cancelación definitiva. Dichas sanciones tendrán que ser aplicadas por el juez del proceso, el Colegio de Abogado correspondiente al recibir la información del Juzgado evaluará por remitir la información a la Dirección de Ética Profesional del C.A.L, o por suspender al curador procesal hasta por 2 años.

2.2.3. La responsabilidad civil de las partes en el proceso

La postura de esta investigación se orienta hacia el reconocimiento de la responsabilidad civil que se le debería atribuir a las partes procesales, por lo mismo que se debe asumir la postura desde una perspectiva de subjetividad de cada uno de estos intervinientes a través de los intereses que le son inherentes.

El sentido de reconocer la responsabilidad civil de las partes tiene que ver en forma directa con la naturaleza propia de esta figura jurídica, pues tal cual lo señala Vidal (2001) en su artículo jurídico titulado “La Responsabilidad Civil”, inicia dando una justificación de la responsabilidad civil señalando que: “El ser humano, como ser de relación, en el desarrollo de su conducta intersubjetiva está permanentemente en la posibilidad de incurrir en responsabilidad, la que , por eso, es inherente a la vida social”. (p. 389)

Entonces, es posible que se reconozca la responsabilidad de las personas en razón de condiciones jurídicas que se relacionan con el carácter subjetivo, argumento que permitiría la inclusión de la responsabilidad de las partes en un proceso, cuando se trata de distorsionar el proceso a través de las malas prácticas procesales.

Sobre ello es que se puede reconocer la postura del investigador Campos (2018) quien en su artículo jurídico titulado: “Responsabilidad civil y medidas provisionales: Breves anotaciones a la propuesta de reforma del Código Procesal Civil peruano”, en el cual señala lo siguiente: “ (...) en consideración las capacidades de prevención de los litigantes respecto del resultado del proceso, nos llevaría, desde la lógica de la responsabilidad civil e incluso del derecho procesal, a reconocer una responsabilidad de tipo subjetiva”. (pp. 287-288)

Capítulo III

Análisis y resultados

De acuerdo a lo señalado en el proyecto de investigación se planteó como unidad de análisis a los elementos que señalan la población comprendida entre los casos judicializados sobre convocatoria a junta de accionistas, dentro de lo cual se ha señalado la muestra conformada por el único expediente que se encuentra en el nivel de ejecución de sentencia para la convocatoria de la junta de accionistas.

Tal expediente se ha incorporado como elemento de observación, trasladando las principales piezas procesales que permitieron ver la situación concurrente respecto a la designación de los órganos de auxilio judicial en calidad de administradores, los mismos que de manera continua solamente se han ocupado de la gestión empresarial mas no han logrado la finalidad para la cual se les designo que es ejecutar la sentencia convocando a la junta de accionistas, lo cual se muestra en detalle a continuación.

3.1. De los resultados de la evaluación de resoluciones

PRINCIPALES PIEZAS PROCESALES DEL EXPEDIENTE No 01711-2004-0-1706-JR-CI-03 – QUE DA ORIGEN AL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO A LA FALTA DE REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS LITISCONSORTES [PARTES PROCESALES] QUE PROPONEN A UN ÓRGANO DE AUXILIO JUDICIAL.

Res. 499 – EL JUZGADO OPTA POR DESIGNAR A UNA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NO PROPUESTA POR LAS PARTES DEL PROCESO.

DÉCIMO PRIMERO: De lo expuesto, en el considerando precedente se aprecia que:

11.1. Se ha venido aceptando las propuestas de administración judicial provisional de las partes, sin embargo, **se aprecia que ha pasado más de trece años sin que se llegue a ejecutar la sentencia contenida en la resolución número diecisiete, de fecha siete de diciembre de dos mil cuatro** [Convocatoria a Junta General de Accionistas de AGROPUCALA S.A.A., para tratar la agenda que se indica en la citada sentencia], **prolongando la administración judicial provisional** [medida cautelar⁵].

11.2. El Juez está provisto de la facultad de adecuar la medida en orden a lo que mejor corresponda a la naturaleza de la pretensión principal asegurable [apartándose -si fuera necesario de la propia posición del solicitante], tal y conforme lo tiene previsto el artículo 611° del Código Procesal Civil, por lo que, **teniendo en cuenta los intereses jurídicos en disputa, el impacto colectivo social y laboral, el riesgo de perjuicio económico a la empresa afectada, las posiciones irreconciliables de los socios apersonados y otras contingencias conducen a que el Aquo adopte medidas de adecuación a la tutela cautelar, a fin de garantizar la necesaria estabilidad en tanto dure la transición de retorno a una gestión societaria regular.**

11.3. En consecuencia, a fin de paliar el estado de crisis empresarial cuya aplicación forma parte responsable de la correcta Administración de Justicia, bajo el entendido que la empresa afectada [AGROPUCALA S.A.A.], no es propiedad exclusiva, ni

excluyente de ningún socio individual, minoritario, ni mayoritario, sino de una unidad económica que - dentro de sus propios fines de obtener una justa rentabilidad derivada de los negocios propios de su giro- importa como ente económico y social trascendente, fuente de la actividad laboral y medio de subsistencia de muchos trabajadores cuya preservación constituye -conforme a los artículos 22°, 24° y 58° de la Constitución Política vigente- uno de los propósitos principales del Estado.

11.4. Si bien, los principios de independencia e imparcialidad judicial constituyen componentes esenciales de la función jurisdiccional, estos poseen una doble configuración, pues también constituyen garantías para las partes procesales. Por ello, cuando se vulneran principios como la independencia o imparcialidad del juzgador, también se afecta el derecho a un juez independiente e imparcial y consecuentemente, la "tutela jurisdiccional efectiva". **En el caso de autos, se ha venido designado desde el año dos mil cuatro administrador provisional propuestos por las mismas partes, los mismos, que han mostrado incapacidad en el cargo, pues han venido dilatando la ejecución de la sentencia y creando conflictos entre sus socios. No obstante ello, es deber del juzgador ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes, siendo que la dirección del proceso está a cargo del Juez7, ello orientado a la consolidación de la ejecución de la Sentencia, la misma, que lleva más de catorce años sin poder ejecutarse, siendo ese el estado del proceso, por lo que, resulta necesario efectuar las acciones correspondientes tendientes a lograr identificar con precisión y especificidad entre otros, a los accionistas a convocarse a Junta General, a través del cotejo correspondiente con el capital social inscrito en los Registros Públicos,**

labor que deberá desempeñarla el administrador provisional [órgano de auxilio con capacidad y perfil adecuado para el cargo encomendado].

11.5. Estando a los ítems precedentes, **habida cuenta de las diversas posiciones contrapuestas al interior de la empresa afectada, y, a fin de no prolongar la administración judicial provisional el Aquo, tiene a bien ordenar que:** i) se curse oficio al Decano del Colegio de Administradores, a fin de que remita EN EL PLAZO DE TRES DÍAS Y CON EL CARÁCTER DE URGENTE una nomina de DIEZ ADMINISTRADORES, con no menos de cinco años de colegiado y que acrediten estar habilitados al menos seis meses anteriores a la expedición de la presente resolución, ii) se curse oficio al Decano del Colegio de Economistas, a fin de que remita EN EL PLAZO DE TRES DÍAS Y CON EL CARÁCTER DE URGENTE una nomina de DIEZ ECONOMISTAS, con no menos de cinco años de colegiado y que acrediten estar habilitados al menos seis meses anteriores a la expedición de la presente resolución; **con el fin de designar al profesional calificado [órgano de auxilio] para el mejor desempeño en el cargo encomendado, y, que no se encuentre vinculado con ninguna de las partes que forman parte del presente proceso, y, así coadyuve a arribar a la ejecución de la sentencia emitida en autos, esto es, convocar a Junta General de Accionistas de AGROPUCALA S.A.A., para tratar la agenda que se indica en la sentencia contenida en la resolución número diecisiete, de fecha siete de diciembre de dos mil cuatro.**

RES. 10 DEL CUADERNO DE APELACIÓN No 7 DE LA SALA SUPERIOR QUE OPTA POR CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN 499.

SEXTO.- Que, “los órganos de auxilio judicial son mecanismos de apoyo para contribuir a los fines del proceso” encaminados, con poderes y objetivos específicos que no representan los intereses de las partes y que deben cumplir mandato de la sentencia incorporada por el juez y que no podrían, en base a criterios propios variar lo sentenciado o pendiente de ejecución sin incurrir en responsabilidad y su labor lo ejercitan no como mandatarios o representantes de las partes o de terceros, sino como funcionarios judiciales sujetos a directivas, instrucciones, vigilancia y sanciones del juez que los nombró, y más aún si el administrador judicial al asumir el cargo cesan automáticamente las funciones de los órganos directivos y ejecutivos de la empresa como lo establece el segundo párrafo del artículo 672° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a la administración dispuesta en el caso sub materia, debiendo por ello cumplir su función sin comprometer su imparcialidad respecto de las partes o el objeto de su función, de manera que es pasible de remoción si se extralimita en sus atribuciones que se le confieren y no guardan en el proceso una debida objetividad e imparcialidad.

SÉTIMO.- Que, la doctora Marianela Ledesma Narváez en el tomo III del Comentario al Código Procesal Civil en la pagina 701 establece que "en el caso de las sociedades, cualquiera sea su forma, no es posible que un socio bajo el argumento de la supuesta copropiedad de los bienes sociales solicite la designación de un administrador judicial, pues los bienes sociales no son comunes, sino de la sociedad, sobre los cuales el socio no tiene ningún derecho directo".

OCTAVO.- Que, por otro lado la doctrina se ha encargado en precisar "un socio no puede solicitar la designación de un administrador judicial de bienes sociales, por no ser copropietarios de los bienes sociales de los bienes de la sociedad. Los bienes de la sociedad están destinados a la realización de las actividades económicas que

constituye el objeto social para lo cual son CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE SEGUNDA SALA CIVIL 3 de 4 organizados por los órganos de administración de la sociedad, los que solo pueden ser nombrados o removidos conforme a las reglas generales de sociedades¹ ".

NOVENO.- Que, por otro lado según la opinión del doctor Enrique Elías La Rosa el derecho que se les confiere mediante las acciones a los socios se conciben bajo el supuesto de dos tipos: las relacionadas con la cuestión económica como los dividendos así como los derechos a los remanentes respecto al monto liquidado, las suscripciones preferentes así como lo que tiene que ver con caracteres políticos, dentro de lo cual se puede ubicar al derecho a votar, la posibilidad de ser separado así como el derecho que se relaciona con las acciones que controlan los modos y las formas que se reconocen legalmente.

DÉCIMO.- Que, en una sociedad anónima el directorio es elegido por la junta general de accionistas y es el directorio el que elige al gerente o gerentes de la misma tal como lo establece los artículos 153 y 185 de la Ley de Sociedades, y como quiera que no ha sido factible en el proceso la convocatoria a junta y la designación del directorio y que este pueda nombrar al gerente de la empresa y ante la renuncia del administrador judicial Luis Alberto Dávila Dávila y al fin de que la Empresa Agro Pucalá S.A.A no quede en una situación de acefalía, el juez como director del proceso tenía que tomar bajo responsabilidad las medidas urgentes para proveer la representación de dicha empresa designando a los administradores judiciales a efecto de evitar un perjuicio irreparable en condición de órgano de auxilio judicial y que deben recaer en profesionales que tengan conocimiento y experiencia en la administración y gestión de una empresa de la envergadura y complejidad de Agropucalá S.A.A y para cuya finalidad no podrían ser de

aplicación las normas relativas a la administración judicial de bienes comunes regulados por los artículos 769 y siguientes del Código Procesal Civil, ni el artículo 611° del acotado código adjetivo, porque no estamos ante un supuesto de una medida cautelar en forma de administración en la cual el acreedor es quien propone al juez la designación o varios administradores como erróneamente pretende la parte apelante, ni los socios que se hayan apersonado al proceso porque carecen de legitimidad para proponer la designación de administradores judiciales según la Ley General de Sociedades.

Res. 507 – EL JUZGADO DESIGNA A UNA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL REGISTRO DE PERITOS – REPEJ – NO PROPUESTA POR LAS PARTES ANTE LA INVIABILIDAD DEL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DEL COLEGIO DE CONTADORES Y DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES.

SÉPTIMO: La dirección del proceso está a cargo del Juez, ello orientado a la consolidación de la ejecución de la Sentencia, la misma que, hasta la fecha no puede ejecutarse, siendo ese el estado del proceso, resultando necesario efectuar acciones correspondientes tendientes a lograr identificar con precisión y especificidad entre otros, a los accionistas a convocarse a Junta General, a través del cotejo correspondiente con el capital social inscrito en los Registros Públicos, labor que deberá desempeñar el administrador provisional designado; **es así que frente a la inoperancia de las administraciones que han pasado por estos largos años y la renuncia de la actual administración, es que en base a lo preceptuado por el artículo cincuenta numeral uno y artículo seiscientos once del Código Procesal Civil se adoptó como medida necesaria requerir a los colegios profesionales de administradores y economistas -éste último reemplazado por el de contadores-**

una nómina de profesionales hábiles en el ejercicio de su profesión a fin de seleccionar al idóneo y logre coadyuvar con la convocatoria a junta general de accionistas; empero, los desmanes ocurridos en los exteriores de las instalaciones de estos centros profesionales por parte de seudos representantes de la empresa demandada solo han logrado retrasar el mandato judicial; debiendo ser valorada la conducta de éstos en el devenir del proceso.

RES. 03 – CUADERNO 44, QUE CONFIRMA A RES. 507

2. De manera concordante, el artículo 50, inciso 1, del mismo Código prevé que son deberes de los Jueces en el proceso: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal.

3. En relación a los recursos impugnatorios interpuestos contra la resolución número quinientos siete, de folio ciento dieciocho, y atendiendo a los agravios expuestos por los apelantes, conviene resumir lo resuelto por esta Sala Superior en el cuaderno número 01711-2004-7, auto de vista de fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, en el que ha señalado lo siguiente:

3.1. Se ha indicado en primer término que los órganos de auxilio judicial son mecanismos de apoyo para contribuir a los fines del proceso, no representan los intereses de las partes y deben cumplir con el encargo dado por el juez, sin poder variar lo sentenciado o pendiente de ejecución sin incurrir en responsabilidad, y ejercitan su labor no como mandatarios o representantes de las partes o terceros, sino como funcionarios judiciales sujetos a directivas, instrucciones, vigilancia y sanciones del juez que los nombró, pudiendo ser removidos si se extralimitan en sus funciones y no guardan en el proceso una debida objetividad e imparcialidad.

3.2. También, se ha señalado que un socio no puede solicitar la designación de un administrador judicial de bienes sociales, por no ser copropietario de los bienes de la sociedad, sino que los mismos están destinados a la realización de las actividades económicas que constituye el objeto social.

3.3. Teniéndose en cuenta la situación de acefalía en la que se encuentra la empresa demandada, el juez se encuentra obligado a adoptar las medidas urgentes para proveer la representación de la empresa designando administradores judiciales a efectos de evitar un perjuicio irreparable, designación que debe recaer en profesionales que tengan conocimiento y experiencia en la administración y gestión de una empresa de la envergadura y complejidad de Agro Pucalá S.A.A., por lo que no estamos ante una medida cautelar en forma de administración en la cual el acreedor es quien propone al juez la designación de administradores.

4. De acuerdo a lo señalado por esta Sala Especializada en el cuaderno citado, no es materia de ejecución medidas de embargo destinadas a obtener la recuperación de algún derecho o crédito a favor de la parte demandante, en cuyo caso ésta, en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que comprende el derecho a que se ejecuten las resoluciones judiciales, puede solicitar la medida que resulte más pertinente a su derecho, y que sea más eficiente para recuperar su crédito o derecho, y el juez deberá concederla siempre y cuando cumplan los requisitos previstos por la norma procesal.

5. Por el contrario, de acuerdo a la sentencia anteriormente citada que se ha expedido en el proceso principal, el objeto del proceso y, por consiguiente, de la ejecución de la sentencia, es que se convoque a junta general de accionistas, y en tanto ello no sea posible el juzgador viene designando administradores judiciales

para posibilitar que la empresa pueda continuar desenvolviéndose en su actividad regular y oportunamente se restablezca su organización.

6. En ese sentido, no se encuentra justificado el pretendido derecho que invocan los apelantes para que los administradores judiciales provisionales se designen en base a las propuestas de las partes, más aún si los recurrentes no tienen la calidad de partes sino de terceros que intervienen en el proceso de acuerdo al interés que han invocado, y por tanto, su actividad procesal debiera estar encaminada a agilizar el trámite del proceso y no a obstaculizarlo.

RESOLUCIÓN No 518. EL JUZGADO CAMBIA NUEVAMENTE DE CRITERIO Y DECIDE SUBROGAR A LAS ADMINISTRADORAS NO PROPUESTAS POR LAS PARTES Y DESIGNA –NUEVAMENTE – A UN ADMINISTRADOR JUDICIAL PROPUESTO POR UN LITISCONSORTE CONSIDERANDO “RESPONSABILIDAD” EN LA PARTE PROCESAL QUE PROPONE EL NOMBRAMIENTO.

DÉCIMO SEXTO [...]

16.6 En el contexto antes descrito se han venido presentando diversas solicitudes de subrogación de las actuales órganos de auxilio judicial, sosteniéndose la existencia de presuntas irregularidades e incumplimiento de funciones, que se resumen principalmente en las siguientes: a) incumplimiento en la presentación del cronograma de actividades para la Convocatoria de Junta General de Accionistas, b) desinterés por el trámite del proceso al pretender incluir en el cronograma de actividades a CONASEV, cuando dicho órgano ha sido sustituido por la Superintendencia de Mercado de Valores, quien por Ley N° 29782 carece de competencia para dicho propósito, c) La existencia de una vinculación perjudicial para la empresa demandada entre las actuales administradoras provisionales y el ex

Gerente General, Max Ayora Inoñan, llegando incluso a realizar reuniones sociales dentro de la empresa, tal como, se difundió por diversas redes sociales, en vez de velar por su correcta gestión, lo que implica una falta de profesionalismo en el desarrollo de su función, d) “La designación como gerentes de línea de profesionales carentes de idoneidad para el desempeño de tales cargos, e) el retraso de pago de la Compensación de Tiempo de Servicios de los trabajadores jubilados, así como, del pago puntual de las remuneraciones de los trabajadores activos”, entre otros.

16.7. “Según lo establece el artículo 671° del Código Procesal Civil, los órganos de auxilio judicial se encuentran sometidos a una serie de obligaciones específicas contempladas en dicha norma legal, así como, a otras diversas de carácter general establecidas en dicho Código o contempladas en la ley; vale decir que los órganos de auxilio judicial, al desempeñarse como administradores provisionales de la empresa demandada, no lo hacen —o al menos no deberían hacerlo— a su libre discreción, sino que se encuentran sometidos a una serie de obligaciones y parámetros legales dentro de los cuales deben circunscribir el ejercicio de sus funciones, en aras de una correcta administración y el cabal cumplimiento de las labores encomendadas por el órgano jurisdiccional”.

16.8. Todas estas observaciones “valoradas en su conjunto, configuran motivo suficiente para decretar la subrogación y variación de las actuales integrantes del órgano de auxilio judicial, de conformidad con lo prescrito por el artículo 633° del Código Procesal Civil”, en función de lo cual se evidencia la improvisación e irrupción de terceros en la toma de decisiones, control y manejo de la empresa en la administración designada debido a la escasa información del proceso por parte de YOLANDA DEL CARMEN PEREZ ARRASCUE y PAULINA CONSUELO

VENTURA ZAPATA, administradoras provisionales de la demandada, lo que amerita aceptar el pedido de subrogación a solicitud de las partes a fin de evitar no sólo el mayor retraso en la ejecución de la sentencia, sino también, presuntos malos manejos que ponen en perjuicio el patrimonio y utilidades de la administrada, así como, el retraso en pagos a los trabajadores activos y jubilados, que deben ser superados de modo urgente, más aún, teniendo en cuenta que en los diversos medios de comunicación se ha difundido imágenes, en donde, se aprecia que el azúcar que produce la empresa está siendo empaquetadas en bolsas plásticas transparentes sin el logo de AGROPUCALA SAA, lo que amerita una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes, tal como, ya lo han hecho de conocimiento ante el Ministerio Público las partes del proceso. [...]

16.10. Al respecto se debe tener en cuenta que la conducta asumida por la administración provisional frente a las observaciones expuestas tanto por el Juzgado como por las partes sí demuestra deficiencias en el ejercicio profesional de la función encomendada; toda vez que, la designación de una administración provisional no sólo tiene como función la gestión y administración de la empresa, sino también, la convocatoria a la Junta General de Accionista lo que acredita una actitud desinteresada y poco profesional de la administración provisional; lo cual acredita el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 671° del Código Procesal Civil, por lo que, a fin de evitar mayor dilación en la ejecución de la sentencia que obra en autos, corresponde adoptar las medidas pertinentes, disponiendo en primer término la SUBROGACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS PROVISIONALES por carecer de las cualidades necesarias para ejecutar el mandato ordenado por esta Judicatura.

17.11 En ese sentido, y con los antecedentes precitados, tenemos que si bien por Resolución Judicial Número Cuatrocientos Noventa y nueve, se resolvió designar una administración ajena a las partes procesales, dicha decisión debe ser reevaluada en base a las siguientes razones: [...]

c) Resulta evidente que la administración judicial de la empresa demandada AGROPUCALA SAC debe recaer no solo en profesionales con reconocida trayectoria laboral, sino que se requiere que estas posean pleno conocimiento del proceso y por sobre todo, la finalidad de la Medida Cautelar, a fin de evitar ser inducidos a error, tal como se ha evidenciado con la administración actual designada por este despacho, en la cual, la misma asesora legal, encargada de coadyuvar con la realización de la Convocatoria a Junta General de Accionista fue catalogadas por los administradores judiciales, como una profesional con amplia experiencia y dominio del tema, hecho que no se ha visto reflejado en el cronograma de actividades propuesto, al proponer coordinar con la Superintendencia de Mercado y Valores [anteriormente CONASEV] para certificar la realidad de libro matrícula de acciones. Siendo que por resolución de vista seis, emitida en el cuaderno N° 1711-2004- 62, de fecha seis de marzo de dos mil trece, la Superior Sala estimo que dicho organismo no tiene competencia para la Convocatoria de Junta de Accionista conforme a Ley N° 29782. d) Por estas razones carece de objeto realizar el proceso de selección de los profesionales indicados en las nóminas, a fin de evitar represalias contra terceros y por sobre todo dilatar la Convocatoria a Junta General de Accionistas, **QUE ES LA PARTE MEDULAR DE ESTE PROCESO,** debiéndose retomar la designación de una administración judicial a propuesta de las partes, la misma, que será civilmente responsable con su proponente.

e) Asimismo, es de precisarse que si bien las anteriores administraciones judiciales han sido designadas por el Juzgado competente; **dicha designación ha sido tomada de las propuestas presentadas por las partes; siendo estas últimas quienes frente al fracaso de la convocatoria a Junta General de Accionistas y por presuntamente realizar malos manejos dentro de la administración a su cargo, evaden responsabilidades, alegando que es el juzgado quien finalmente nombra la administración y que éstos solo cumplen con proponerlos, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad** tal como lo dejó constar el litisconsorte Anaximandro Bustamante Rodríguez en su escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho que obra a folios trescientos cuarenta y ocho a trescientos cincuenta y seis del tomo ciento diecinueve; debiendo precisarse que fue el citado litisconsorte ANAXIMANDRO BUSTAMANTE RODRÍGUEZ, quien propuso al anterior administrador LUIS ALBERTO DÁVILA DÁVILA, designado por resolución número cuatrocientos doce, siendo su proponente incluso, quien solicitó en reiteradas oportunidades la subrogación de éste.

[...]

19.7. Manteniendo el mismo criterio, adoptado por este Despacho el órgano de auxilio designado deberá en un plazo de TREINTA DÍAS, de asumida las funciones, presentar a este Juzgado el cronograma de actividades, previas a realizar

la convocatoria a Junta General de Accionistas, y, poder así llevar un control sobre el avance de la ejecución de la sentencia contenida en autos, BAJO EXPRESO APERCIBIMIENTO DE SER SUSTITUIDO tal como lo han venido exigiendo, asumiendo las responsabilidades civiles, administrativas y/o penales de ser el caso, **CONJUNTAMENTE CON SU PROPONENTE. Ello permitirá además que las partes involucradas puedan exigir de manera fundada el cumplimiento de lo ordenado, evaluando sus avances. Es de precisarse que cualquier acto destinado a evitar, frustrar o suspender la convocatoria dispuesta por sentencia firme atentaría contra el principio contemplado en el artículo ciento treinta y nueve inciso dos de la Constitución, referido a la prohibición de autoridad alguna de retardar la ejecución de sentencias con autoridad de cosa juzgada.**

RES 10 DEL CUADERNO 87 - DECLARA NULA LA RESOLUCIÓN 518 POR MOTIVACIÓN INSUFICIENTE:

TERCERO. - RESPECTO DEL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR JUDICIAL:

1º) En principio se advierte que por resolución número cuatrocientos noventa y nueve se resolvió designar una Administración ajena a las partes procesales, habiendo sido confirmada dicha decisión por la Resolución de vista número diez del dieciocho de mayo de 2018 en el Cuaderno N° 01711-2004-7- 1706-JR-CI-03. Posteriormente en la resolución impugnada número quinientos dieciocho (punto 17.11) se decide reevaluar dicha decisión y retomar la designación de una Administración Judicial propuesta por las partes.

2º) La razón que expone el Juez para no convocar para el ejercicio del cargo de Administrador a los consignados en la nómina del Colegio de Administradores y

en la nómina del Colegio de Contadores, sería que el Decano del Colegio de Administradores solicitó se deje sin efecto la nómina enviada al Juzgado por ponerse en peligro la integridad de los mismos. Sin embargo, el Juzgado no llegó a hacer las invitaciones individuales a los Profesionales en Administración para ver si alguno de ellos estaban dispuestos a aceptar la designación. Por otro lado, en cuanto a los Contadores, no se señala en la resolución que exista pedido alguno de dejar sin efecto la nómina enviada por dicho Colegio, ni renuncia a asumir el cargo.

3º) Igualmente no se ha tenido en cuenta que hay más de una propuesta para elegir al nuevo Administrador Judicial Provisional ya que el señor Anaximandro Bustamante Rodríguez propuso al Abogado JOSÉ LUIS CHAFLOQUE GASTULO por lo que previamente el Juzgado debió poner en conocimiento de las partes en el proceso, la posible elección de uno de ellos para que se recibieran las observaciones que creyeran conveniente realizar los intervinientes en este proceso. En todo caso, el Juez al evaluar una de ellas como la mejor opción, debió expresarlo así previamente para posibilitar el análisis y observación de las partes y eventualmente permitir el cuestionamiento de la decisión de no optar por el otro candidato.

CUARTO: En conclusión, se puede afirmar que la resolución impugnada ha incurrido en Nulidad por motivación insuficiente, como se ha precisado a lo largo de la presente resolución, debiendo indicarse que es garantía de la función jurisdiccional, conforme establece el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, la motivación escrita de las resoluciones judiciales.

RESOLUCIÓN No 523 – EL JUZGADOR NUEVAMENTE NOMBRA COMO ADMINISTRADORAS JUDICIALES (ÓRGANOS DE AUXILIO JUDICIAL) A

LAS PERITOS DEL REPEJ – NO PROPUESTAS POR LAS PARTES PROCESALES.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Al oficio N° 01711-2004-87-SSEC/L, remitido por la secretaria de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se adjunta copia certificada de la resolución de vista número diez, derivada del cuaderno de apelación N° 01711-2004-87- 1706-JR-CI-03, de fecha treinta de octubre del año en curso:

22.1. En atención a lo resuelto por el Superior en grado se deberá dejar sin efecto la designación del Mg. JORGE HERNÁN ATOCHE PACHERRES, como administrador provisional de la demandada AGROPUCALA SAA, **debiendo notificarse a las administradoras provisionales YOLANDA DEL CARMEN PEREZ ARRASCUE y PAULINA CONSUELO VENTURA ZAPATA, a fin de que retornen a asumir el cargo y funciones consignados en la resolución número quinientos siete**, de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho [folios 539-556 del tomo 120] caso contrario deberán informar a este despacho dentro de las VEINTICUATRO HORAS los motivos o razones que las imposibilita a reasumir dicho cargo.

22.2. Sin perjuicio de ello y en atención al punto tercero del segundo considerando de la Resolución de Vista N° DIEZ, se deberá tener en cuenta que a fin de terminar con intereses personales y consolidar el compromiso de las partes por el interés general de la empresa y de la masa trabajadora, que la administración designada deberá trabajar en conjunto con las partes procesales, esto es, con la empresa demandante y con los litisconsortes. [...]

RESOLUCIÓN 03 DEL CUADERNO 46 QUE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 523.

9.- Si la Sala ha advertido que el juzgador no ha expuesto las razones para remover a las administradoras judiciales; no ha agotado las diligencias necesarias para determinar si hay candidatos calificados que podrían asumir el cargo de administrador provisional; y no ha corrido traslado a las partes con las propuestas de administradores; la consecuencia necesaria de la indicada decisión es que las señoras administradoras, cuyo cese de designación se dispuso mediante la Resolución N° 518 (declarada nula), retornen a la administración de la empresa demandada por no haberse expuesto las razones de su remoción; y debía también quedar sin efecto la designación del señor José Hernán Atoche Pachérrez.

3.2. De los resultados sobre la validación de los expertos

De acuerdo al segundo aspecto de la muestra considerada para la observación de la realidad en esta investigación, se planteó la aplicación de una encuesta a los expertos en el área del Derecho Civil, a fin de reconocer el nivel de validación de las posturas que se adoptan en la temática de esta tesis. Tales resultados se han trasladado a esta sección mediante la tabulación y las ilustraciones correspondientes que se muestran seguidamente.

Tabla 1: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 1”.

1. La participación del órgano de auxilio judicial en un proceso que repercute sobre la administración del negocio permite la intervención de las partes procesales para proponer su designación.

| Alternativa | Número de respuestas |
|------------------|----------------------|
| a. De acuerdo | 40 |
| b. En desacuerdo | 04 |
| c. No opina | 06 |
| Total | 50 |

Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 1”.

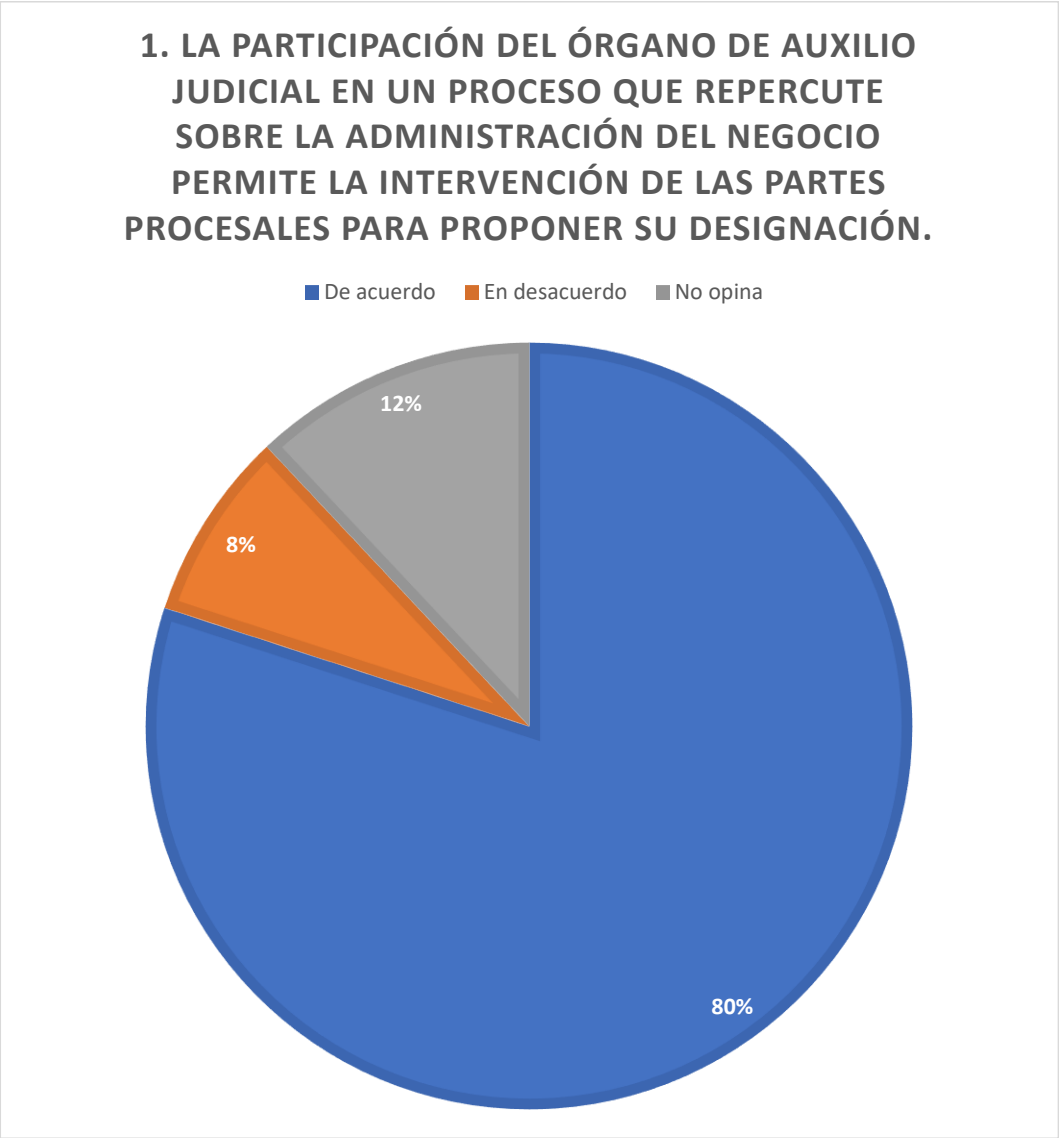


Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 2”.

2. La facultad ejercida por las partes procesales no asegura el carácter de idoneidad del órgano de auxilio judicial propuesto, para la correcta ejecución del mandato judicial.

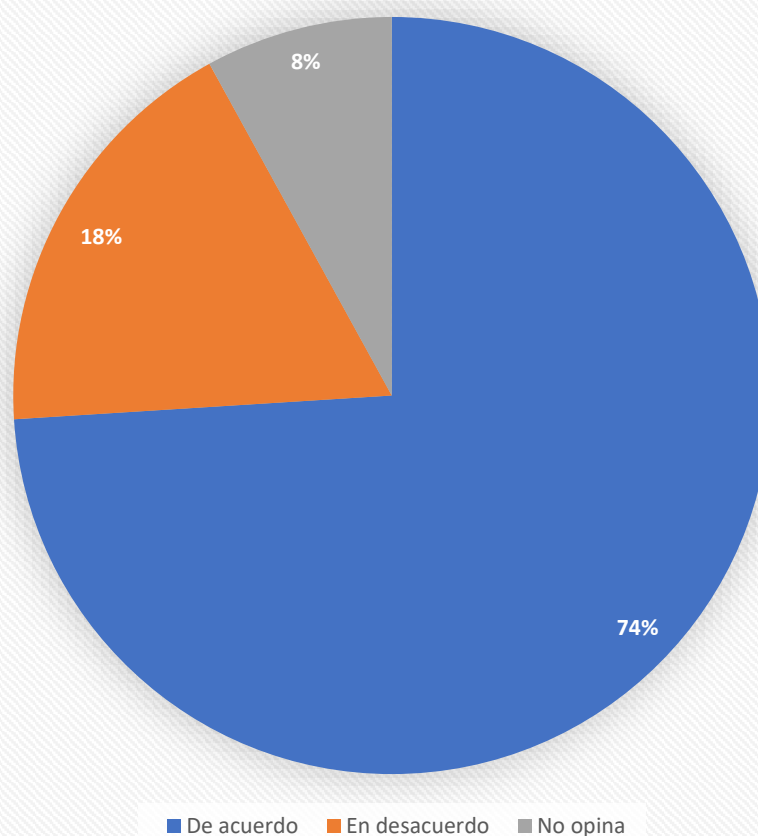


Tabla 3: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 3”.

3. Se debe incorporar un límite de control respecto de la facultad de las partes procesales a fin lograr la idoneidad de la propuesta del órgano de auxilio judicial que ejecutará el mandato judicial.

| Alternativa | Número de respuestas |
|------------------|----------------------|
| a. De acuerdo | 39 |
| b. En desacuerdo | 04 |
| c. No opina | 07 |
| Total | 50 |

Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 3”.

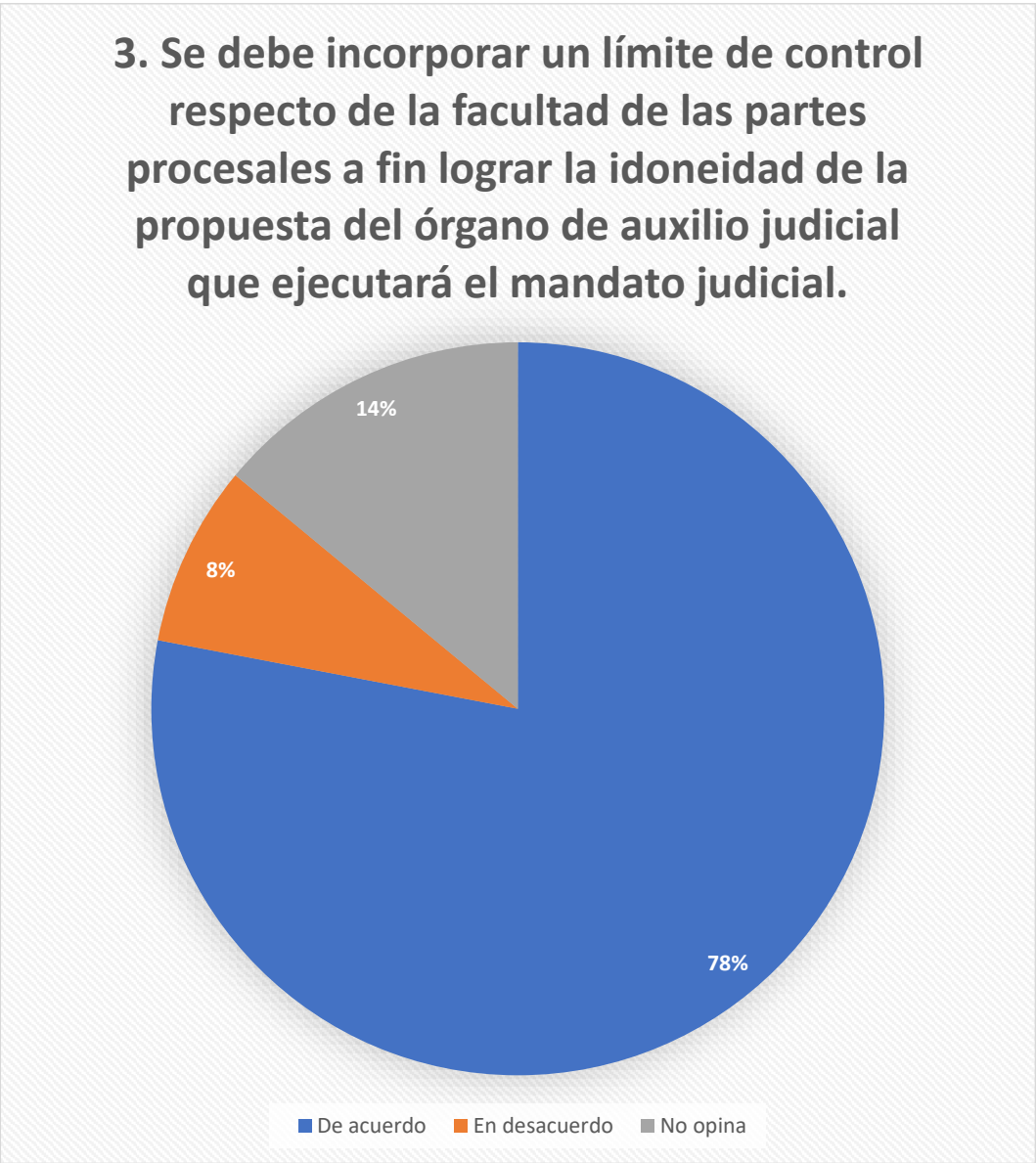


Tabla 4: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 4”.

4. La intervención de las partes del proceso permite atribuir responsabilidad civil respecto de sus actuaciones durante el desarrollo procesal como una condición de control.

| Alternativa | Número de respuestas |
|------------------|----------------------|
| a. De acuerdo | 42 |
| b. En desacuerdo | 04 |
| c. No opina | 04 |
| Total | 50 |

Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 4”.

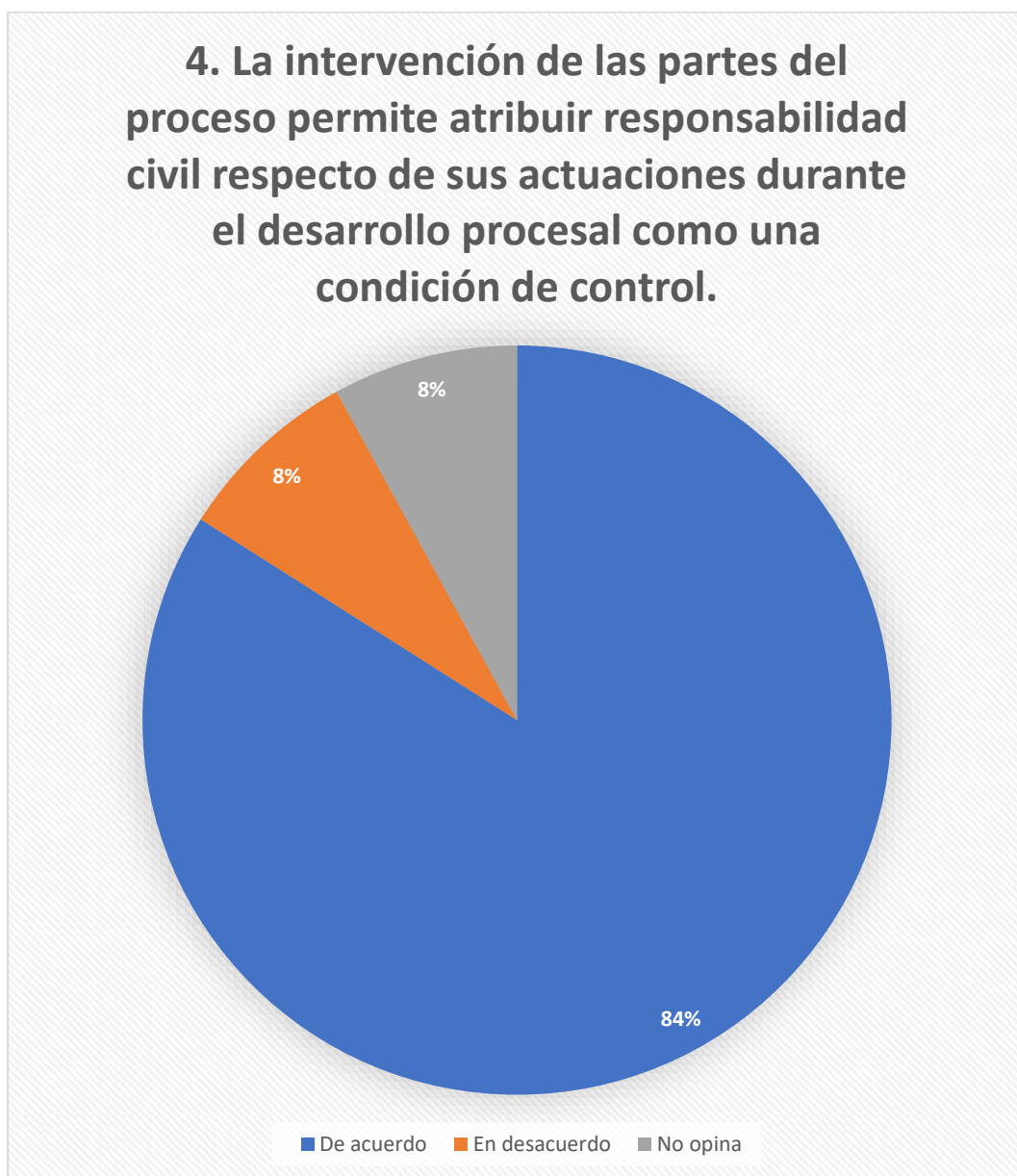


Tabla 5: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 5”.

5. En el ordenamiento civil peruano no existe el control adecuado de la intervención de las partes procesales en función a su responsabilidad civil ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial propuesto.

| Alternativa | Número de respuestas |
|------------------|----------------------|
| a. De acuerdo | 33 |
| b. En desacuerdo | 12 |
| c. No opina | 05 |
| Total | 50 |

Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 5”.

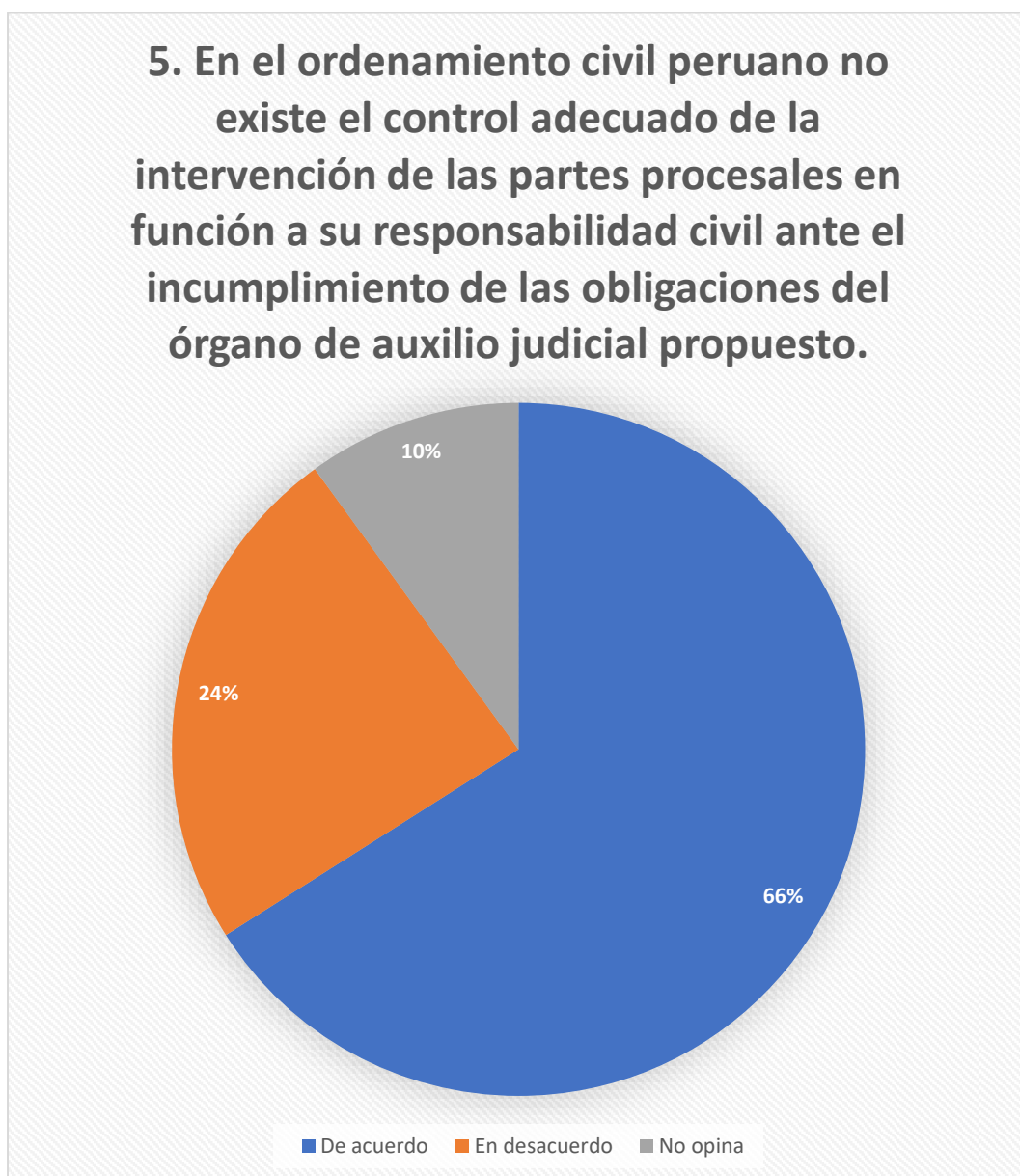
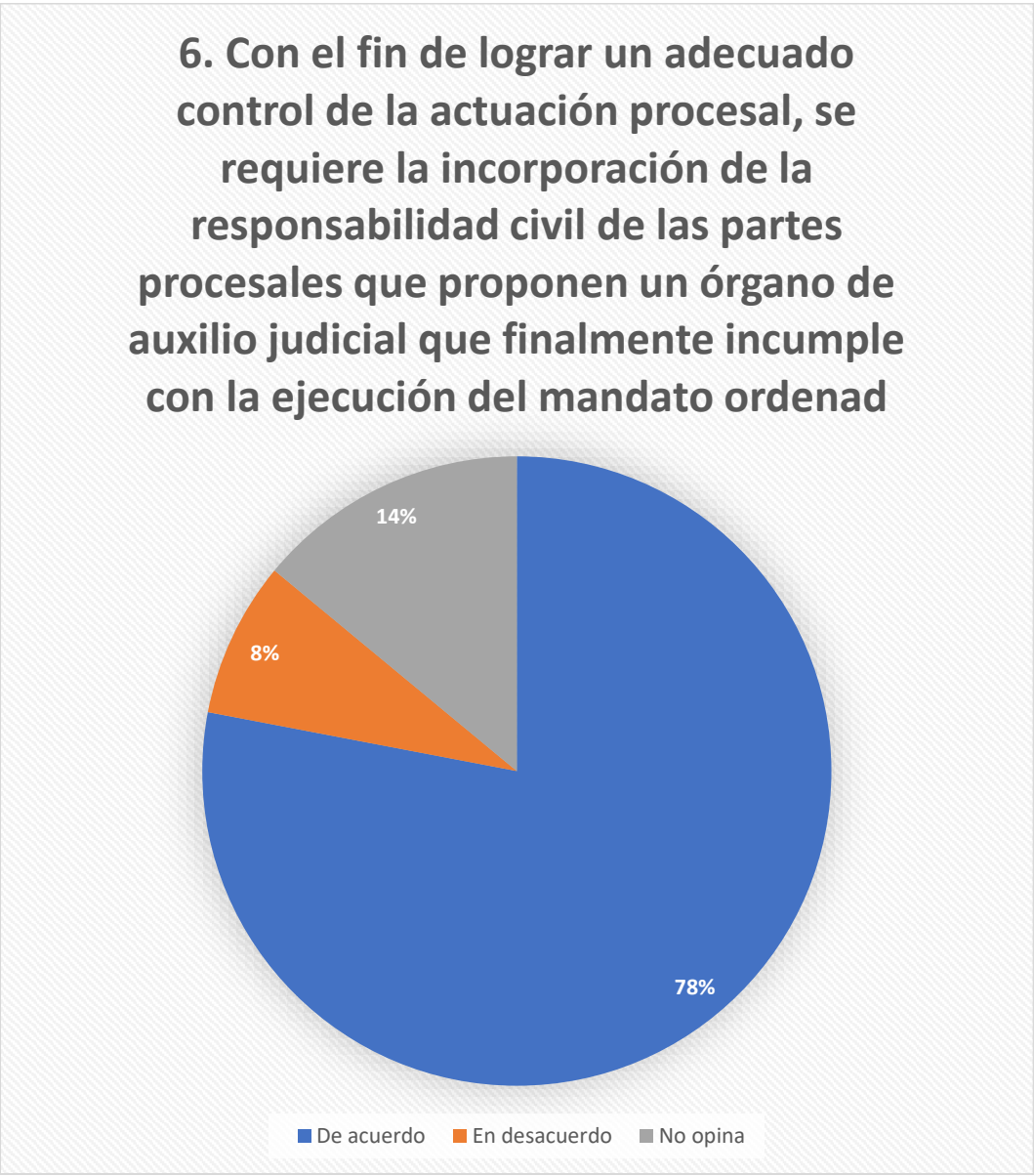


Tabla 6: “Tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 6”.

6. Con el fin de lograr un adecuado control de la actuación procesal, se requiere la incorporación de la responsabilidad civil de las partes procesales que proponen un órgano de auxilio judicial que finalmente incumple con la ejecución del mandato ordenado.

| Alternativa | Número de respuestas |
|------------------|----------------------|
| a. De acuerdo | 39 |
| b. En desacuerdo | 04 |
| c. No opina | 07 |
| Total | 50 |

Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos en los juzgados civiles del Distrito Judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 6”.



Capítulo IV

La contrastación de la hipótesis

De acuerdo a la estructura de la investigación, en base a la construcción teórica que se incorpora en función a las fuentes bibliográficas, en tanto contenido, se procede a realizar el análisis crítico del trabajo académico, así pues se ha de considerar el desarrollo de la discusión como primera parte de la contrastación de hipótesis, realizada sobre cada uno de los objetivos específicos, resultados que se han agrupado a manera de tomas de postura para reconocer la viabilidad y validación de cada una de las variables de la tesis; finalmente estos resultados permiten unificar una determinación última que se compara con la hipótesis a priori obteniendo un resultado que se muestra como la prueba científica de la postura de esta investigación.

4.1. La discusión de los resultados obtenidos en la investigación

4.1.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Desarrollar doctrinariamente las facultades de las partes procesales, entre ellas los litisconsortes, con especial atención respecto a la propuesta del órgano de auxilio judicial que se ha designado”

Según lo desarrollado en la fase teórica de la investigación se ha podido reconocer el sentido de aplicación del análisis respecto a la presencia y funciones de cada una de las partes que intervienen en el proceso civil; dentro de lo cual se reconoce como principal elemento a las facultades que se le irrogan por su condición de tal, esto es las libertades que puede asumir en el desarrollo del proceso.

Sobre eso interesa reconocer ciertas características de estas partes, asumiendo su relación con el sentido del proceso mismo; teniendo en cuenta que toda la estructura parte de un mismo punto que se concentra en la normativa constitucional y la estructura originaria del derecho mismo, cabe cuestionar ¿en qué consiste la fase axiológica del proceso?; pues bien, la cuestión que implica toda la estructura jurídica irroga un deber general, que parte como el propio origen del derecho, desde un elemento ético y moral, puesto que el control que se supone ha de ejercer el derecho como actualmente se le conoce, surgió de la unión de aspectos específicos de tal corte con el agregado de la percepción filosófica.

En ese sentido la actividad procesal que se desarrolla debe ajustarse a dichos parámetros que si bien es cierto pareciera no condecirse con la estructura objetiva de la regla y tal vez el principio de legalidad, siempre importa la verificación de la cuestión ética que deben asumir cada una de las partes en la ejecución de sus funciones durante el desarrollo del proceso.

Sobre el diseño estructural del ordenamiento jurídico que se ha descrito, generada esta cada una de las funciones que deben cumplir las partes de un proceso, siendo tal vez el cuestionamiento más importante a saber ¿cuáles son los deberes procesales?, como se ha indicado el esquema jurídico incorpora ciertos principios sobre los cuales se rige el proceso, así la actividad procesal debe ceñirse a ellos y por ende las partes cumplirán funciones bajo el lineamiento de la buena fe como uno de los principales efectos o principios más abstractos que se ha podido reconocer en tal ordenamiento.

Este diseño se ha planteado en función a lo inicialmente advertido, como es el caso de la cuestión moral en el desempeño de las actividades, puesto que la buena fe a través de la doctrina no se ha logrado esclarecer con totalidad o definirla, así

pues esa condición se aprecia como un elemento más orientado a la subjetividad que a la propia legalidad que se entiende debe ser el principio rector que asegura el desarrollo adecuado de un proceso.

Entonces se puede apreciar un carácter especial en el desarrollo de las actividades procesales de las partes que intervienen en él, por ello se cuestiona ¿cuáles son las reglas subjetivas del proceso?, tal cual se ha señalado una de esas reglas subjetivas es la buena fe en la actuación procesal de cada una de las partes, lamentablemente según lo que se desprende de la teoría sólo puede presumirse, ya que su carácter subjetivo no permite una probanza de tipo objetiva.

Lo indicado sólo puede asumirse bajo el carácter de certeza en tanto se pretenda relacionar con la seguridad jurídica que se incorpora como otro elemento dentro del proceso civil, para lo cual se sirve de varios elementos circundantes mediante los cuales se puede garantizar dicha convicción y asegurar que la actuación de las partes se desarrolle en función a la buena fe; tal es el caso de los órganos de auxilio judicial.

Es por ello que se incorpora el cuestionamiento siguiente: ¿Qué es un órgano de auxilio judicial?, como se ha indicado anteriormente existe la necesidad de garantizar la ejecución de ciertas actividades dentro del proceso o las que se supone deberían cumplirse tanto para garantizar su desarrollo cuanto para la culminación del mismo a través de la ejecución de los mandatos que se hubieran establecido.

Para el caso específico de los órganos de auxilio judicial, se presentan en el proceso bajo ciertas condiciones, el caso que más interesa para esta investigación será aquel que sea incorporado mediante la petición o sugerencia de alguna de las partes del proceso; en ese sentido, se puede apreciar que existe una correlación entre

el órgano de auxilio judicial y la seguridad jurídica que se ha de generar mediante el proceso civil.

Siendo así, interesa saber ¿cuáles son las funciones del órgano de auxilio judicial?, toda vez que la actividad de los mismos se considera como un elemento de garantía, esta condición será la que permita al proceso generar el efecto del reconocimiento de los derechos a quien realmente le corresponda, actividad a la cual se someten las partes; dicho sometimiento implica la asunción de las consecuencias que pudieran generar cada una de sus actividades en tanto se aparten de las pautas que determinan los principios del proceso civil.

De acuerdo a lo señalado respecto a la actuación de las partes procesales, se advierte en ciertas condiciones o circunstancias la incorporación de sujetos procesales que acuden con los mismos intereses que las partes originarias, es en este caso que se produce un conflicto que sería aquel elemento distorsionador del carácter de buena fe como principio y la consecuencia de inseguridad jurídica de la ejecución que supone promueve el proceso.

Esta indicación hace referencia a los litisconsortes que participan en un determinado proceso, actividad que debe ser controlada de acuerdo a los parámetros específicos del proceso civil, la preocupación teórica de esta investigación surge sobre la forma en que se adoptan las decisiones de cada uno de estos intervinientes, que posiblemente pudieran poner en riesgo la garantía de seguridad jurídica.

TOMA DE POSTURA

Según lo establecido del análisis legislativo que corresponde al control de la actividad de las partes procesales, se advierte que existe una compleja estructura que pese a ello no alcanza a ocuparse del aspecto subjetivo que implica la

determinación de la buena fe, que para el caso de estudio correspondería a los órganos de auxilio judicial, que sólo puede verificarse como un efecto, esto es no se previene la acción de mala fe. Por lo mismo que sería importante incorporar ciertas reglas que permitan el control de tal intervención en el proceso.

4.1.2. Discusión sobre el objetivo específico: Estudiar la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil orientada hacia el incumplimiento de las obligaciones, como argumento

A que se refiere el derecho de daños

Que es la responsabilidad civil como figura jurídica de índole indemnizatorio, compensatorio, reparador.

A que se refiere la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto

Luego del reconocimiento del cargo que supone la responsabilidad civil en función al incumplimiento de las obligaciones, se puede indicar que la posición doctrinaria que permite identificar dicho cargo en función a las consecuencias que asume aquella persona que se encuentra sujeta al cumplimiento de un deber de conducta que el propio ordenamiento le hubiera impuesto.

El argumento de la responsabilidad civil tiene una relación directa con la necesidad de recuperar condiciones previas a la ejecución de una acción dañosa, para ello se proyecta hacia la necesidad de imponer un cargo, que se puede comprender hasta como una sanción o castigo, que debiera mas bien para el ámbito civil, asumirse como la intención de reparar el perjuicio a fin de que los derechos

sean reconocidos de manera adecuada, tal finalidad que se reconoce del propio proceso.

Siendo que en el proceso civil intervienen las partes procesales con el fin de lograr el esclarecimiento de cierta circunstancia a fin de que se reconozca a quien corresponda el verdadero derecho, se someten a ciertas condiciones de actuación, dentro de la actividad procesal, advirtiéndose condiciones especiales tanto a nivel objetivo que se orienta por la norma, cuanto a nivel subjetivo que se desprende de la regla pero adoptan un tinte ético y moral.

Cuál es la finalidad de la responsabilidad civil y su relación con la que se le atribuye a los órganos de auxilio judicial en razón del incumplimiento de obligaciones.

TOMA DE POSTURA:

La responsabilidad civil se comprende como una relación de correspondencia entre la acción dañosa o que ocasiona un perjuicio y la necesidad de resarcirlo, sobre ello la regulación jurídica establece pautas para su reconocimiento y ejecución entre las cuales no se ubica alguna específica que se ocupe de atribuir responsabilidad civil a las partes procesal por el incumplimiento de los órganos de auxilio judicial que han propuesto; por lo mismo que resulta necesaria la observación de las políticas judiciales que se ocupan del control sobre las actividades de quienes participan en las fases del proceso civil.

4.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: Analizar la necesidad de incorporar una regla de responsabilidad civil sobre las partes procesales, que propone un órgano de auxilio judicial que incumple con sus obligaciones y por ende con la finalidad del proceso.

Como se ha venido sosteniendo, durante el desarrollo de la presente investigación, así como de la muestra expuesta respecto al expediente No 01711-2004-0-1706-JR-CI-03, existe un problema latente y evidente respecto de la intervención de las partes procesales al momento de la propuesta del sujeto procesal que se convertirá en el órgano de auxilio judicial; así, esta propuesta –para su posterior designación por parte del juzgador – no siempre va ligada a una conducta ética o moral definida que vaya destinada a cumplir con la finalidad del proceso, sino que muchas veces está ligada a intereses personales o subalternos que impiden cumplir con el objetivo procesal.

Es por ello que, al revisar la secuencia de las resoluciones postuladas como muestra en la investigación, se advierte que existe la intención de parte del juzgador para establecer medidas que procuren desde el control sobre la actividad de las partes procesales, esto es los litisconsortes, al momento de proponer al órgano de auxilio judicial, a fin de evitar el entorpecimiento de la ejecución de la decisión final del proceso.

Esta secuencia de resoluciones permite reconocer el primer elemento de la responsabilidad civil como es el daño o perjuicio ocasionado, que para el caso materia de análisis será el impedimento de cumplir con el mandato judicial, trayendo como consecuencias además de las procesales incluso patrimoniales. Siendo así, puede observarse que tal consecuencia corresponde directamente a la acción de los litisconsortes que proponen al órgano de auxilio.

En ese sentido se advierte la relación necesaria que sirve de argumento para la atribución de responsabilidad civil, como una herramienta de control de la actividad que ejecutan las partes procesales. Además de ello es posible reconocer el nivel de responsabilidad, de acuerdo al análisis de las resoluciones que componen la muestra, por qué, ante la acción del magistrado para propiciar la intervención de órganos de auxilio judicial independientes, esto es fuera de la decisión de los litisconsortes, estos plantean los recursos procesales necesarios a fin de retomar la decisión sobre quienes habrán de administrar la empresa para los fines ejecutivos de la sentencia.

Esto último se configura como la mala fe de parte de los sujetos procesales, dado que con su acción opuesta al razonamiento jurídico del magistrado que con el fin de solucionar el problema, propician el aplazamiento de la ejecución de la sentencia, convirtiéndose en un círculo vicioso que no permite zanjar el problema respecto a la administración de la empresa Agropucalá.

Lo señalado se advierte como la razón que origina el incumplimiento de las obligaciones conferidas al órgano de auxilio judicial que si bien la estructura del ordenamiento jurídico establece argumentos de responsabilidad directa de este tipo de institución; según lo mostrado, se puede establecer que existe una relación directa con los litisconsortes que lo designan, que permitiría plantear la incorporación de responsabilidad civil para estos sujetos procesales.

Toma de postura:

Es posible incorporar la regla de responsabilidad civil sobre las partes procesales, ante la identificación de la mala fe que supone la designación de un órgano de auxilio judicial para la administración de una empresa, ante la verificación del incumplimiento de los fines liquidadores que suponen la ejecución

de la sentencia; dado que se advierte la relación entre las decisiones particulares de los litisconsortes con los resultados negativos de las administraciones que en secuencia se producen como un perjuicio directo sobre tal ejecución, elemento que orienta el reconocimiento de la regla de responsabilidad en el ámbito civil. Este planteamiento se sugiere con la intención de evitar la dilación ejecutiva de las sentencias y eliminar la intervención de intereses ocultos respecto a la permanencia de la administración.

4.2. La validación de las variables

4.2.1. Validación de la variable independiente: “La responsabilidad civil ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial, propuesto por las partes del proceso”

De igual manera que la variable anterior, la dependiente identifica la consecuencia que se produce en razón de la intervención de la primera, en ese sentido debe asumirse que la responsabilidad civil puede ser aplicada como un efecto sancionador respecto a la identificación del incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial, lo cual constituye un perjuicio o daño respecto a la ejecución de la sentencia. Siendo así esta carga de responsabilidad se vincula con las partes procesales que lo proponen.

Para tal fin debe señalarse que la responsabilidad civil se comprende como una relación de correspondencia entre la acción dañosa o que ocasiona un perjuicio y la necesidad de resarcirlo, sobre ello la regulación jurídica establece pautas para su reconocimiento y ejecución entre las cuales no se ubica alguna específica que se ocupe de atribuir responsabilidad civil a las partes procesal por el incumplimiento de los órganos de auxilio judicial que han propuesto; por lo mismo que resulta necesaria la observación de las políticas judiciales que se ocupan del control sobre las actividades de quienes participan en las fases del proceso civil.

En virtud al argumento teórico recogido, para el caso de las partes procesales que proponen el órgano de auxilio judicial para la administración de la empresa, es posible incorporar la regla de responsabilidad civil, ante la identificación de la mala fe que supone la propuesta que conlleva a la designación; ante la verificación del incumplimiento de los fines liquidadores que suponen la ejecución de la sentencia;

dado que se advierte la relación entre las decisiones particulares de los litisconsortes con los resultados negativos de las administraciones que en secuencia se producen como un perjuicio directo sobre tal ejecución, elemento que orienta el reconocimiento de la regla de responsabilidad en el ámbito civil. Este planteamiento se sugiere con la intención de evitar la dilación ejecutiva de las sentencias y eliminar la intervención de intereses ocultos respecto a la permanencia de la administración. De acuerdo con lo señalado se puede indicar que la variable dependiente se valida de la siguiente manera:

Se justifica la incorporación de responsabilidad civil para las partes del proceso, ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial, debido a la vinculación de la mala fe que propicia la dilación en la ejecución de la sentencia.

4.2.2. Validación de la variable dependiente: “La facultad de las partes procesales para proponer el órgano de auxilio judicial en la administración del negocio”

Resulta necesario indicar que la función de esta variable independiente ha sido la de plantear el origen del problema, así la facultad que tienen las partes procesales para poder proponer el órgano de auxilio judicial para la administración del negocio que se habrá de liquidar, se entiende como la principal razón que orienta al retraso de la ejecución de la sentencia judicial. En ese sentido habrá de señalarse que la configuración legislativa que corresponde al control de la actividad de las partes procesales permite reconocer la existencia de una compleja estructura que pese a ello no alcanza a ocuparse del aspecto subjetivo que implica la determinación de la buena fe.

En lo que corresponde a la verificación de la buena fe en el caso particular de la intervención de las partes procesales para la designación del órgano de auxilio judicial, sólo es posible entenderlo como un efecto, esto es, no se previene la acción de mala fe. Por lo mismo que sería importante incorporar ciertas reglas que permitan el control de tal intervención en el proceso, a fin de establecer una pauta de control de parte de la judicatura en aras de la ejecución de las decisiones que se plantean en las sentencias. Por todo ello la variable independiente se valida bajo la siguiente indicación:

La facultad de las partes procesales para proponer el órgano de auxilio judicial en la administración del negocio no siempre esta revertida de buena fe por lo que se requiere elementos de control aplicados por el juzgador.

4.3. La contrastación de la hipótesis

En función a la síntesis de la validación de cada una de las variables, se ha logrado conjugar las determinaciones parciales a fin de construir una de carácter final, lo cual se relaciona con el sentido del objetivo general de la investigación.

La facultad de las partes procesales para proponer el órgano de auxilio judicial no siempre esta revestida de buena fe por lo que se requiere elementos de control aplicados por el juzgador; por lo tanto, se justifica la incorporación de responsabilidad civil para las partes del proceso, ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial, debido a la vinculación de la mala fe que propicia la dilación en la ejecución de la sentencia.

Conclusiones:

Primera:

Se concluye en función a las facultades de las partes procesales, entre ellas los litisconsortes, con especial atención respecto a la propuesta del órgano de auxilio judicial que se ha designado, que respecto al control de la actividad de las partes procesales, se advierte que existe una compleja estructura que pese a ello no alcanza a ocuparse del aspecto subjetivo que implica la determinación de la buena fe, que para el caso de estudio correspondería a los órganos de auxilio judicial, que sólo puede verificarse como un efecto, esto es no se previene la acción de mala fe. Por lo mismo que sería importante incorporar ciertas reglas que permitan el control de tal intervención en el proceso.

Segunda:

Se ha logrado determinar de acuerdo con la responsabilidad civil y su naturaleza jurídica orientada hacia el incumplimiento de las obligaciones, que al entenderse como una relación de correspondencia entre la acción dañosa o que ocasiona un perjuicio y la necesidad de resarcirlo, sobre ello la regulación jurídica establece pautas para su reconocimiento y ejecución entre las cuales no se ubica alguna específica que se ocupe de atribuir responsabilidad civil a las partes procesal por el incumplimiento de los órganos de auxilio judicial que han propuesto; por lo mismo que resulta necesaria la observación de las políticas judiciales que se ocupan del control sobre las actividades de quienes participan en las fases del proceso civil.

Tercera:

Finalmente se concluye que es posible incorporar la regla de responsabilidad civil sobre las partes procesales, ante la identificación de la mala fe que supone la

designación de un órgano de auxilio judicial para la administración de una empresa, ante la verificación del incumplimiento de los fines liquidadores que suponen la ejecución de la sentencia; dado que se advierte la relación entre las decisiones particulares de los litisconsortes con los resultados negativos de las administraciones que en secuencia se producen como un perjuicio directo sobre tal ejecución, elemento que orienta el reconocimiento de la regla de responsabilidad en el ámbito civil. Este planteamiento se sugiere con la intención de evitar la dilación ejecutiva de las sentencias y eliminar la intervención de intereses ocultos respecto a la permanencia de la administración.

Recomendaciones

Primera:

Se sugiere la incorporación de la regla sobre responsabilidad civil a los sujetos procesales, a fin de evitar la dilación de los procesos de ejecución de sentencia en tanto se advierta la presencia de mala fe que produzca el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial propuesto.

Segunda:

Se recomienda que la incorporación de responsabilidad civil a las partes procesales sea destinada en la regla que contiene el artículo 669 del Código Procesal Civil, lo cual será plasmado de la siguiente manera:

Código Civil

Artículo 669.- Embargo en forma de administración de bienes

(...)

Es responsable civilmente el sujeto procesal que propone la designación del órgano de auxilio judicial, en tanto se verifique el incumplimiento consecutivo de la obligación en la forma de administración de los bienes.

Anexos

Anexo N° 1. FORMULARIO DE ENCUESTA

Tesis: Alcances de la responsabilidad civil de las partes procesales ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial

Se presenta este formato de encuesta a fin de que los operadores jurídicos en el ámbito civil como expertos en dicha área, puedan validar las propuestas de la investigación que se desarrolla sobre la responsabilidad civil de las partes procesales ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial.

I. Variable independiente: “La facultad de las partes procesales para proponer el órgano de auxilio judicial en la administración del negocio”

1. La participación del órgano de auxilio judicial en un proceso que repercute sobre la administración del negocio permite la intervención de las partes procesales para proponer su designación.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina

2. La facultad ejercida por las partes procesales no asegura el carácter de idoneidad del órgano de auxilio judicial propuesto, para la correcta ejecución del mandato judicial.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina

3. Se debe incorporar un límite de control respecto de la facultad de las partes procesales a fin lograr la idoneidad de la propuesta del órgano de auxilio judicial que ejecutará el mandato judicial.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina

II. Variable dependiente: “La responsabilidad civil ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial, propuesto por las partes del proceso”

4. La intervención de las partes del proceso permite atribuir responsabilidad civil respecto de sus actuaciones durante el desarrollo procesal como una condición de control.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina

5. En el ordenamiento civil peruano no existe el control adecuado de la intervención de las partes procesales en función a su responsabilidad civil ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial propuesto.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina

6. Con el fin de lograr un adecuado control de la actuación procesal, se requiere la incorporación de la responsabilidad civil de las partes procesales que proponen un órgano de auxilio judicial que finalmente incumple con la ejecución del mandato ordenado.

Link de la encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM3BLGL_gd8nF_7m2XgvbDeoF6TRfMtpTzW8czI4CJJXyruQ/viewform?usp=sf_link

Bibliografía

- Agudelo Ramírez, M. (2003). *Sujetos del proceso jurisdiccional. Revista Temas Procesales del Centro de Estudios de Derecho Procesal de Medellín*. Bogotá: Ediciones Leyer.
- Álvarez del Cuvillo, A. (2008). *Apuntes de Derecho Procesal Laboral*. Cádiz: Universidad de Cádiz.
- Alvarez Solis , C. (2016). *La redacción del Artículo 207 del Código Civil y su indicencia sobre el principio general de la Reponsabilidad Civil subjetiva en el ordenamiento jurídico peruano*. Trujillo: Universidad Privada del Norte.
- Anchondo Paredes, V. E. (2012). Métodos de interpretación jurídica. *Quid Iuris*, 33-58. Obtenido de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-iuris/article/view/17406>
- Bacre, A. (1986). *Teoría General del Proceso*. Buenos Aires: Ed. Abeledo Perrot, Bs. As.
- Bustamante Alsina, J. (1997). *Teoría General de la Responsabilidad Civil*. Buenos Aires: Fondo Editorial de la Universidad de Buenos Aires.
- Campos García, H. (2018). Responsabilidad civil y medidas provisionales: Breves anotaciones a la propuesta de reforma del Código Procesal Civil peruano. *Derecho y Sociedad*(51), 283-295. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/20872/20583/>

- Carretta Muñoz, F. (2008). Deberes procesales de las partes en el proceso civil Chileno: Referencia a la Buena fe procesal y al deber de coherencia. *Revista de Derecho*, XXI(1), 101-127. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/revider/v21n1/art05.pdf>
- CAS. N° 3921-2014, N° 3921-2014 (Sala Civil de la Corte Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 21 de Julio de 2015).
- Castillo Yataco, W. (2008). Litisconsorcio e intervención de terceros. *Centro de estudios de reforma de Código Procesal Civil*, 1-113.
- Cavani, R. (2016). *Litisconsorcio en el CPC peruano*. Lima.
- Cea Egaña, J. L. (2004). La seguridad jurídica como derecho fundamental. *Revista de Derecho*, XI(1), 47-70. Obtenido de <https://revistaderecho.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/2147/2682>
- Cegarra Sánchez, J. (2004). *Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica*. Madrid: Díaz de Santos.
- De Pina y Vara, R. (2001). *Derecho Civil y Mercantil Mexicano*. México D.F.: Grupo Planeta.
- Díez-Picazo, L., & Gullón Ballesteros, A. (1994). *Culpa y riesgo en la responsabilidad civil extracontractual*. Lima: Tecnos.
- Estrella Cama, F. (2009). *El Nexo Causal en los Procesos por Responsabilidad Civil Extracontractual*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- Franciskovic Ingunza, B. (2015). Aspectos diferenciadores entre la capacidad de las partes y la legitimidad procesal: la representación versus la legitimidad para obrar. *Advocatus*, 277-287.
- Gallardo Miraval, J. (2000). *Cautela y Contracautela en el Proceso Civil*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtenido de https://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Human/Gallardo_M_J/T_completo.pdf
- González-Alegre Bernardo, M. (1959). *La responsabilidad civil en el proceso penal; algunos ejemplos prácticos de su evaluación a través de sentencias de la Audiencia Provincial de Albacete*. Albacete: Universidad de Murcia.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. D. (2010). *METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN*. México: Mac - Graw - HILL/ INTERAMERICANA EDITORES.
- Ledesma Narváez, M. (2008). *Comentarios al Código procesal civil: análisis artículo por artículo. Tomo I*. Lima: Gaceta Jurídica.
- León Hilario, L. (2011). *La Responsabilidad Civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas*. Lima: Jurista Editores.
- Monroy Gálvez , J. (1993). *Partes, acumulación, litisconsorcio, intervención de terceros y sucesión procesal en el Código Procesal Civil*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Montero Aroca, J. (2007). *De la legitimación en el proceso civil*. Madrid: Bosch.
- Montero Aroca, J., Ortells Ramos, & Gómez Colomer. (1994). *Derecho jurisdiccional, Vol II*. Barcelona: Bosch.

- Mosset Iturraspe, J. (1997). *La Frustración del Contrato y la Pesificación*. Buenos Aires: Codex.
- Ortiz Alzate, J. (2010). Sujetos procesales. (Partes, terceros e intervinientes). *Revista Facultad de Derecho. Ratio Juris Vol. 5 No. 10*, 49-63.
- Pacherres Pérez, G. (2002). El litisconsorcio necesario ante los efectos de la interposición válida de los recursos y remedios. *Revista Jurídica Cajamarca*.
- Prado Bringas, R., & Zegarra Valencia, O. (Julio de 2016). Litisconsorcio e Intervención de terceros en el Proceso Civil: Buscando una nueva aproximación. *Revista IUS ET VERITAS*(52), 298-315.
- Prado Monge, R. (2007). Abogados, litigantes y ese dedo meñique. Reflexiones en torno a los deberes de conducta de las partes y sus abogados. *Derecho y Cambio Social* N° 12(12). Obtenido de <https://www.derechoycambiosocial.com/revista012/conducta%20procesal.htm>
- Satta , S. (1971). Manual de Derecho Procesal Civil. *Traducción de la séptima edición italiana por Santiago Sentis & Fernando de la Rúa, I.*
- Véscovi, E. (1999). *Teoría General del Proceso*. Bogotá: Editorial Temis S.A.
- Vidal Ramírez, F. (2001). La Responsabilidad Civil. *Revistas PUCP*, 389-399. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/download/6527/6607>



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN
A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 64-2022-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Marco Manuel Montenegro Molocho**.

Siendo las 11:00 a.m. del día martes 22 de noviembre del 2022 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS PARTES PROCESALES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE AUXILIO JUDICIAL**", designados por Decreto N° 136-2020-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 10 de diciembre del 2020, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO.

SECRETARIO : Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO.

VOCAL : Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA

La tesis fue asesorada por Mag. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ, nombrada por Decreto N°136-2020-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 10 de diciembre del 2020.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°256-2022-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 07 de noviembre del 2022.

La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Marco Manuel Montenegro Molocho** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADA con la nota de 17 (DIECISIETE) en la escala vigesimal, mención de BUENO.**

Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de **ABOGADO**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 12:32 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link:

https://drive.google.com/file/d/17jQXTNot6T7k_9nB9q7k1u8n0nABbFbk/view?usp=share_link

Lambayeque, martes 22 de noviembre del 2022

Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO
Presidente del Jurado

Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
Secretario del Jurado

Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del jurado

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 64-2022-UI-FDCP correspondiente a Marco Manuel Montenegro Molocho, evento que se ha realizado de manera virtual el día martes 22 de noviembre del 2022 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 25 de mayo del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

Dr. Rafael Hernández Canelo
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, **Mg. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ**, Asesor de tesis¹, del
Bachiller: **MARCO MANUEL MONTENEGRO MOLOCHO**, Titulada “*ALCANCES DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS PARTES PROCESALES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE AUXILIO JUDICIAL*”, luego de la revisión exhaustiva del
documento, constató que la misma tiene un índice de similitud de **19 %** verificable
en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada uno de las coincidencias
detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con
todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 20 de mayo del 2022



MAG. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ
D.N.I. 16667328
ASESOR

Se adjunta:
Resumen del Reporte (Con porcentaje y parámetros de configuración)
Recibo digital.

Alcances de la responsabilidad civil de las partes procesales ante el incumplimiento de las obligaciones del órgano de auxilio judicial

INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

19%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

[idoc.pub](#)

Fuente de Internet

2%

2

[repositorio.unprg.edu.pe](#)

Fuente de Internet

2%

3

[doku.pub](#)

Fuente de Internet

1%

4

[www.redalyc.org](#)

Fuente de Internet

1%

5

[www.agronegocios.pe](#)

Fuente de Internet

1%

6

[repositorio.uladech.edu.pe](#)

Fuente de Internet

1%

7

[www.studocu.com](#)

Fuente de Internet

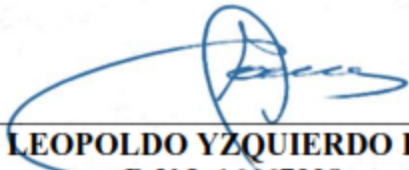
1%

8

Submitted to Universidad Privada Antenor
Orrego

Trabajo del estudiante

1%


MAG. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ
D.N.I. 16667328
ASESOR

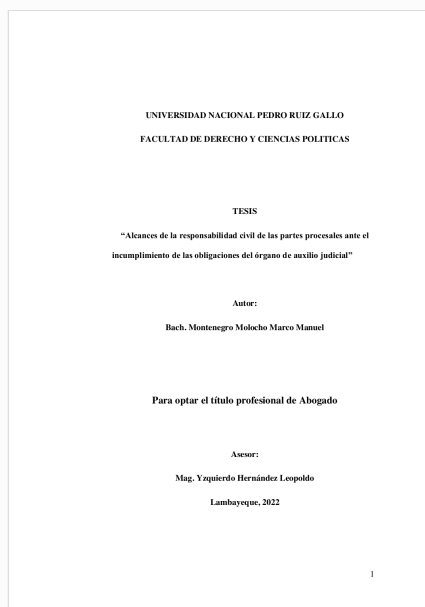


Recibo digital

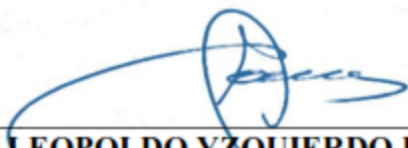
Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Marco Manuel Montenegro Molocho
Título del ejercicio: tesis
Título de la entrega: Alcances de la responsabilidad civil de las partes procesales...
Nombre del archivo: INFORME_FINAL_DE_TESIS_MONTENEGRO_MOLOCHO_MARC...
Tamaño del archivo: 207.6K
Total páginas: 104
Total de palabras: 21,092
Total de caracteres: 113,032
Fecha de entrega: 18-may.-2022 10:06p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 1839530797



Derechos de autor 2022 Turnitin. Todos los derechos reservados.


MAG. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ
D.N.I. 16667328
ASESOR